

Las comunidades como contrapartes:

estudio preliminar de concesiones y conflictos en mercados emergentes y fronterizos

Informe elaborado para la Iniciativa para los Derechos y Recursos por

Andrea Alforte
Joseph Angan
Jack Dentith
Karl Domondon
Lou Munden
Sophia Murday
Leonardo Pradela

30 de octubre de 2014

Desde un punto de vista comercial, el riesgo que representan los conflictos que se dan en mercados emergentes o fronterizos entre los operarios de concesiones y las poblaciones locales no solo incumbe a aquellas empresas que llevan a cabo operaciones sobre el terreno, sino que también es de interés para los inversores. Usando como fundamento un examen en curso de diversos casos prácticos, en este análisis se describen los patrones generales que rodean a los conflictos entre las empresas y las comunidades locales de las concesiones en mercados emergentes y fronterizos. La identificación de estos patrones supone el primer paso para establecer unas buenas prácticas de gestión del riesgo.

INTRODUCCIÓN

En los mercados emergentes o fronterizos (MEF) un porcentaje considerable de la tierra se destina al uso comercial mediante acuerdos de concesión. Estos acuerdos representan el marco legal para las actividades económicas de los MEF en diversos sectores, como el petróleo y el gas, la minería, y la agricultura, entre otros.

Como ya hemos mencionado con anterioridad¹, los derechos de propiedad de muchos MEF son disfuncionales hasta el punto de que puede otorgarse a un operario la propiedad de la tierra sin el conocimiento de decenas de miles de personas que viven en esa tierra o dependen de ella. Normalmente, estas personas están arraigadas a su tierra desde muchas generaciones atrás, así que tienen escaso interés en trasladarse a áreas urbanas y resulta prácticamente imposible reasentarlas.

La presencia de gente en la tierra que se destina a concesiones no es algo fuera de lo común: en un análisis que llevamos a cabo paralelamente, descubrimos que había gente en el 93-99 % de los territorios bajo concesión², y que esta presencia era más o menos uniforme en todos los sectores y países analizados. En la Tabla 1, que se incluye a continuación, se ejemplifica la improbabilidad estadística de que las áreas de concesión se encuentren «vacías» (esto es, deshabitadas).

¹ «Los riesgos financieros de la inseguridad en la tenencia de la tierra: la perspectiva de la inversión». Disponible en: <http://www.rightsandresources.org/es/publication/global-capital-local-concessions/> [Último acceso: 2 de octubre de 2014].

² La diferencia en las cifras se debe a que estas se han obtenido de diversas bases de datos demográficos (el 93 % del banco de datos de Landsat y el 99 % de datos de SEDAC). En el Apéndice A puede consultarse información detallada sobre los datos y la metodología que usamos para este análisis.

The Munden Project

Tabla 1: presencia de población en las áreas de concesión de ocho países

<i>País</i>	Concesión	Superficie (km²)	Número total de concesiones excepto en alta mar (polígono)	% de concesiones donde hay gente (Landsat)	% de concesiones donde hay gente (SEDAC)
<i>Brasil</i>	explotación forestal	59 130,02	13	100 %	100 %
	petróleo y gas	239 832,62	115	96 %	100 %
<i>Camboya</i>	aceite de palma, caucho, mandioca, azúcar	21 700,00	225	99 %	100 %
	minería	3 944,64	15	93 %	100 %
<i>Colombia</i>	minería	53 181,67	9 464	97 %	99 %
	petróleo	155 903,06	229	100 %	98 %
<i>Filipinas</i>	madera	5 052,82	22	100 %	100 %
	minería	14 867,64	35	100 %	100 %
<i>Indonesia</i>	aceite de palma	155 245,18	1 845	99 %	98 %
	tala	302 505,81	557	96 %	98 %
	fibra leñosa	128 829,03	570	98 %	100 %
<i>Liberia</i>	agricultura	6 911,93	15	100 %	100 %
	tala	32 758,16	222	100 %	100 %
<i>Mozambique</i>	agricultura (biocarburante)	30 585,04	374	100 %	100 %
<i>Perú</i>	explotación forestal	79 351,73	105	98 %	100 %
	minería	269 894,01	59 159	92 %	100 %
	petróleo y gas	203 258,17	70	97 %	97 %

En algunos países, el porcentaje de tierra que se destina al uso comercial mediante acuerdos de concesión es muy alto. En Perú más de un 40 % de la tierra se destinó a concesiones forestales, de minería y de petróleo y gas. En Liberia se otorgó el uso de aproximadamente un 35 % de la tierra para la agricultura y la producción de madera. Mientras que, en Indonesia, un 30 % de la superficie terrestre total del país se encuentra actualmente bajo algún tipo de concesión³.

Obviamente, el otorgamiento de concesiones sin el conocimiento o aprobación de la gente directamente afectada por estas es un motivo de gran preocupación en lo que respecta a los derechos humanos. No obstante, también puede tener una repercusión financiera real, la cual no solo incumbe a aquellas empresas que llevan a cabo operaciones sobre el terreno.

Por ejemplo, un número cada vez mayor de fondos de capital riesgo invierten en titulares de concesiones en MEF. Asimismo, los gestores de activos de renta variable tienen un interés indirecto por las participaciones en empresas que dependen del suministro procedente de estas concesiones para fabricar sus productos (por ejemplo, las que fabrican bienes de consumo, productos comestibles o bebidas, etc.).

³ Para consultar toda la información desglosada, véase el Apéndice A.

La responsabilidad social empresarial puede resultar eficaz para captar el interés de las empresas, particularmente si el valor de su marca es alto. En cambio, los inversores tienden a interesarse más por «la disponibilidad de datos pertinentes y fiables que reflejen problemas reales y posibles riesgos»⁴. Esto no quiere decir que sean despiadados, sino simplemente que tienden a basarse más en las cifras a la hora de tomar decisiones.

Dada la enorme escasez de concesiones deshabitadas, los inversores deberían asumir que siempre habrá cierto grado de interacción entre el titular de una concesión y quienes vivan en el territorio bajo concesión (y, en muchos casos, también en las cercanías). El coste financiero de que dichas interacciones sean negativas puede ser considerable: en un importante estudio realizado recientemente sobre los costes comerciales derivados de los conflictos se demostró, entre otras cosas, que «en un país, el conflicto empresa-comunidad provocó unos gastos anuales de 100 millones de dólares estadounidenses (US\$) en un proyecto por culpa de interrupciones»⁵. En algunas ocasiones, por ejemplo cuando las comunidades locales tienen derechos legalmente reconocidos sobre la tierra, la violación de estos derechos puede provocar la paralización total de las operaciones⁶.

Tras analizar este problema, hemos llegado a la conclusión de que las poblaciones locales en cierto sentido son una «contraparte no reconocida» de los acuerdos de concesión. Hemos observado que, a menudo, las comunidades usan mecanismos jurídicos para solventar sus agravios con los titulares de concesiones, lo cual parece indicar que los derechos que tienen las comunidades locales sobre una superficie tienen un peso legal considerable, incluso aunque los organismos gubernamentales y los titulares de concesiones no les hayan atribuido mucha trascendencia en las condiciones de sus acuerdos.

Nuestro análisis indica que un acuerdo de concesión no es de por sí una garantía de la capacidad de operar. Incluso cuando las concesiones otorgan el derecho desde un punto de vista legal, a menudo este derecho se pone en tela de juicio si hay tensiones entre una empresa y la población local. Llevamos a cabo un análisis de 60 ejemplos de conflictos en concesiones de minería y tala (dos de los sectores más regulados que estudiamos) para evaluar la legalidad de las concesiones, y solo encontramos cuatro casos en los que hubiera pruebas evidentes de irregularidades en el proceso de concesión u otorgamiento de licencias.

⁴ Comunicado de Norges Bank Investment Management (NBIM). Disponible en: http://www.nbim.no/globalassets/documents/submissions/2013/20131217_rainforestfoundationnorway-2.pdf [En inglés, último acceso: 2 de octubre de 2014].

⁵ FRANKS, D. M.; DAVIS, R.; BEBBINGTON, A. J.; ALI, S. H.; KEMP, D. Y SCURRAH, M.: «Conflict translates environmental and social risk into business costs». *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, Vol. 111, N.º 21, 2014. Disponible en: <http://www.pnas.org/content/111/21/7576> [En inglés, último acceso: 10 de octubre de 2014].

⁶ Esto ocurrió en los distritos de Jesús, Pedro Gálvez y Cachachi de Perú: http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=184 [Último acceso: 2 de octubre de 2014].

La abundancia de conflictos entre empresas y comunidades en casos en los que se ha otorgado una concesión parece indicar que lo que está sobre papel no siempre representa toda la realidad respecto a las operaciones de una concesión.

Al igual que en el caso de otras contrapartes importantes (como un organismo gubernamental o una empresa de ingeniería contratada para construir una mina), deben garantizarse debidamente el consentimiento y la cooperación de la comunidad antes de que una concesión pueda operar en la práctica. El reconocimiento de las comunidades como contrapartes es una forma de estudiar detenidamente lo que se necesita para garantizar debidamente el consentimiento.

Ante este punto de vista, cabe preguntarse: primero, si merece la pena el dinero, tiempo y riesgo que implica tratar con estas contrapartes locales; y, segundo, qué buenas prácticas podemos establecer para limitar los gastos y el riesgo del proceso.

Hemos comenzado un proyecto de varios años de duración con el que pretendemos dar respuesta a estas preguntas⁷. Como punto de partida, en este informe compartimos algunas pruebas que han surgido del análisis de 100 casos de diez MEF diferentes, con el fin de establecer unos patrones generales de los conflictos que rodean a las concesiones⁸. Es cierto que nuestros hallazgos son subjetivos, pero apuntan a las siguientes conclusiones, que son interesantes para inversores:

1. Deben destinarse más recursos a la gestión de riesgos durante la fase inicial de las operaciones de una concesión nueva, o nada más comenzar la expansión de la concesión.
2. Los riesgos derivados de conflictos con poblaciones locales pueden gestionarse cumpliendo unas normas ambientales estrictas.
3. Deben dedicarse más tiempo y recursos a la identificación de contrapartes locales fiables y al establecimiento de relaciones con ellas.

⁷ Se abarcarán los sectores de la minería, la agricultura, las infraestructuras, la energía y la silvicultura. Comenzaremos evaluando con detenimiento los problemas específicos que presenta la tenencia de la tierra para cada sector. Usando esta información como fundamento, diseñaremos unos marcos de diligencia debida y gestión del riesgo adaptados a cada sector, y recomendaremos las buenas prácticas que deberían adoptar las empresas que deseen reducir al mínimo el riesgo y los daños causados por los conflictos con las comunidades locales por motivo de los derechos sobre la tierra y los recursos.

⁸ El número de casos por país es el siguiente: Brasil (33), Perú (19), Mozambique (10), Colombia (8), Filipinas (10), Sudáfrica (6), Indonesia (4), Liberia (4), India (3) y Camboya (3). Los casos se eligieron comenzando por aquellos en los que había más información a disposición del público. Para consultar más información sobre nuestra metodología de selección de los casos prácticos, véase el Apéndice B. La lista completa de los casos puede consultarse en el Apéndice C.

Debemos recalcar que este es un primer paso para eliminar una laguna informativa considerable. Sospechamos que esta laguna existe porque este siempre se ha considerado un problema de derechos humanos (no de inversión), con lo cual solo lo han analizado investigadores que principalmente piensan en términos sociales, legales o políticos. Y, lo que es peor, sus trabajos se han visto enormemente dificultados por la inseguridad (e insuficiencia, francamente) de la financiación pública.

Agradecemos cualquier comentario de personas interesadas en este tema. Pueden enviarnos por correo electrónico a landtenurerisk@mundenproject.com.

PATRONES DE CONFLICTO

Somos conscientes de que las relaciones entre las empresas, las poblaciones locales y los gobiernos no son iguales en todos los MEF y, de hecho, en muchos casos ni siquiera son constantes en un mismo estado o distrito de un país.

En todos los ejemplos que analizamos, el contexto histórico particular de la gente y las instituciones implicadas otorgaba un matiz diferente a la forma que tenían los conflictos de surgir y disolverse. Dicho esto, hay ciertos patrones generales que pueden servir de fundamento para crear e implementar buenas prácticas a nivel mundial.

Por un lado, los conflictos suelen ocurrir en un momento determinado. Además, ese momento suele provocarlo un conjunto específico de agentes y acciones. Y, por último, parece ser que evitar estos problemas requiere la participación de una contraparte específica.

Debemos mencionar también que no se observó ningún patrón en lo que respecta a si un tipo de conflicto provocaba un nivel específico de deterioro financiero. Esto parece indicar que cualquier tipo de conflicto entre una empresa y las contrapartes locales conlleva un posible riesgo de pérdidas para el operario de la concesión.

Del mismo modo, esto también parece indicar que los conflictos pueden gestionarse (y evitarse) de una manera responsable desde el punto de vista económico. El análisis de los patrones que se explican a continuación sería el primer paso para saber cómo hacerlo.

Patrón principal n.º 1: momento en que ocurren los conflictos empresa-comunidad

Hemos observado que la mayoría de los conflictos se desatan cuando se empieza a desarrollar un proyecto⁹. En cambio, solo un 23 % ocurre en condiciones de operación normales entre el comienzo y la finalización del proyecto.

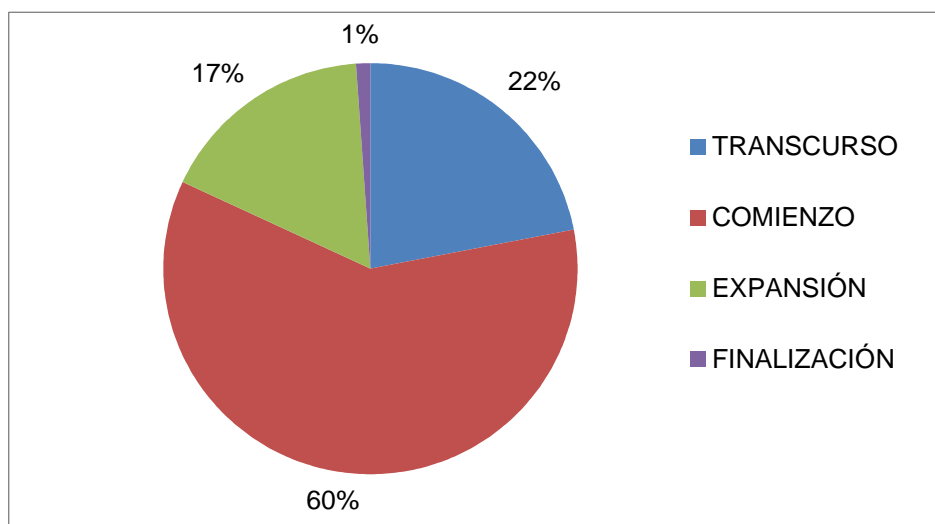
En algunos casos (generalmente los que llegan a los titulares), se encuentra resistencia desde el comienzo de una operación, como fue el caso ocurrido en Pulán (Perú), donde en 2004 las manifestaciones que exigían una evaluación del impacto ambiental (EIA) más exhaustiva detuvieron por primera vez las prospecciones de una mina de oro y plata. Esta resistencia preparó el terreno para posteriores manifestaciones y una intervención regulatoria.

⁹ De los 100 casos analizados, 60 ocurrieron durante el comienzo del proyecto, 22 en el transcurso de las operaciones, 16 durante la fase de expansión y 1 durante la finalización del proyecto.

Hemos visto muchos casos en los que la interacción inicial entre una empresa y sus contrapartes locales había sido tan disfuncional que no pudo alcanzarse ningún tipo de acuerdo¹⁰. En la India, Filipinas y Brasil, las pruebas parecen indicar que las empresas tienden a iniciar la interacción una vez que ya se han tomado decisiones sobre el proyecto; por lo tanto, queda muy poco margen o ninguno para los cambios que puedan proponer las partes locales. Más abajo analizamos con más detalle la importancia que reviste la forma de llevar a cabo las negociaciones.

En otros casos, por ejemplo la expansión de la mina de carbón de El Cerrejón en La Guajira (Colombia), las poblaciones habían convivido durante muchos años con las concesiones cercanas antes de que su expansión desatara las protestas. En La Guajira, había habido una mina de carbón en funcionamiento desde la década de 1970, pero no fue hasta su expansión en 2001 cuando los conflictos afectaron a las operaciones.

Figura 1: momento en que ocurren los conflictos por fase del proyecto



No obstante, normalmente el impacto financiero no es inmediato: al parecer ocurre en algún momento en los primeros tres a cinco años desde que una empresa empieza a operar una concesión.

Generalmente se incurre en pérdidas por dos motivos. El primero gira en torno a los acuerdos jurídicos. Observamos un gran número de casos en los que las pérdidas se sufrieron o bien cuando

¹⁰ En la India: «India rejects Vedanta plans to mine tribal land». Disponible en: <http://www.bbc.com/news/world-south-asia-11067678> [En inglés, último acceso: 2 de octubre de 2014]. En Filipinas: «Glencore Xstrata 'to pull out' of Philippine mining project». Disponible en: <http://www.gmanetwork.com/news/story/346542/economy/companies/glencore-xstrata-to-pull-out-of-philippine-mining-project> [En inglés, último acceso: 2 de octubre de 2014]. En Brasil: «Índios rejeitam hidrelétricas no rio Tapajós». Disponible en: <http://isebvmf.com.br/index.php?r=noticias/view&id=256654> [En portugués, último acceso: 2 de octubre de 2014].

The Munden Project

las negociaciones de los acuerdos con las contrapartes locales pertinentes no se habían llevado a cabo adecuadamente, o cuando se habían incumplido los acuerdos existentes.

Un buen ejemplo de ello es el de Garwula (Liberia), donde no se consultó debidamente a los pequeños propietarios locales respecto a la expansión de una plantación de aceite de palma en sus tierras. Se indignaron tanto por la indemnización que recibieron que trabajaron con una ONG local para presentar una queja, que tuvo como resultado la suspensión de las operaciones. De modo similar, en La Guajira, no se acordó formalmente la indemnización por los impactos de la expansión de una mina, lo que más adelante acarreó a la empresa unos gastos por reasentamiento.

Consideramos que hay dos ideas que explican por qué lo más probable es que los conflictos surjan en las primeras etapas de un proyecto nuevo o en expansión.

En primer lugar, el desarrollo inicial de un proyecto incluye una cantidad desproporcionada de actividades que requieren una interacción directa con las poblaciones locales. Puede tratarse de acciones físicas como desmontar tierras de cultivo cercanas a un centro de población, o del contacto social que se establece cuando los operarios intentan alcanzar acuerdos, por ejemplo para solicitar y obtener el consentimiento para realizar evaluaciones del impacto ambiental.

En segundo lugar, las empresas no mantienen una relación con las comunidades locales cuando comienzan las actividades de esta fase inicial y, a menudo, los operarios subestiman la dificultad de establecer dicha relación y alcanzar acuerdos seguros.

Las poblaciones que viven en un área de concesión no siempre están tan claramente definidas y representadas como otras entidades involucradas en los acuerdos de concesión. La dificultad de alcanzar acuerdos que satisfagan a grupos diversos aumenta en los MEF debido a los problemas logísticos para llegar a personas que viven en zonas remotas y conseguir reunirlos. Los plazos que manejan las entidades comerciales para asegurar las concesiones y comenzar las operaciones no ofrecen alicientes para adoptar el meticuloso enfoque que se necesita para superar con eficacia todas estas complejidades.

Cuando las empresas comienzan un proyecto (y suelen hacerlo de forma que afecta considerablemente al entorno natural y social de un área) sin llegar a un claro entendimiento con las poblaciones locales sobre lo que conllevarán sus operaciones, tendrán que hacer frente a importantes reacciones negativas a su trabajo. Una falta de confianza entre las contrapartes y unos acuerdos mal negociados sobre los beneficios para la comunidad y la protección ambiental podrían explicar por qué el comienzo de las operaciones es el catalizador más común de los conflictos.

Patrón principal n.º 2: incumplimiento de las normas y reparación legal

Nos sorprendió descubrir que el incumplimiento de las normas es la segunda causa más común de conflictos y pérdidas.

Francamente hablando, nuestra experiencia en el sureste de Asia, Latinoamérica y África indica que muchos MEF tienen mecanismos regulatorios laxos. Por lo tanto, esperábamos que el cumplimiento de las normas fuera una mera formalidad, pero no podíamos estar más equivocados.

Nuestras pruebas demuestran que, en diversas ocasiones, las organizaciones locales pudieron usar los mecanismos regulatorios para llevar a los tribunales a una empresa. Lo que es aún más interesante es que las normas ambientales eran la causa más común de las pérdidas por incumplimiento. Si se siguen reuniendo pruebas como estas, podremos asumir con certeza que el mantenimiento de unas normas ambientales es un método importante para reducir el riesgo.

No debemos confundir esto con el típico riesgo regulatorio parecido a los cambios gubernamentales izquierdistas por los que se incluye en el Gobierno a ministros más ajenos al entorno empresarial. Al contrario, la presión regulatoria en nuestros casos surge sobre el terreno: según nuestras pruebas, las autoridades de los MEF rara vez eran las que entablaban juicios basándose en estudios ambientales.

Esta situación podría deberse a que cuentan con una financiación escasa y no tienen la capacidad de ser proactivos. En cualquier caso, si este patrón continúa, significa que el riesgo tendrá que gestionarse mediante negociación directa con las «contrapartes no reconocidas»: las poblaciones locales y organizaciones comunitarias¹¹.

Parece ser que en el caso típico están implicados o bien miembros de la comunidad local o una ONG observadora que documentan una contaminación considerable del agua, la tierra o el aire, o una destrucción forestal, y presentan algún tipo de queja¹². Normalmente, el siguiente paso es una respuesta regulatoria mediocre, que provoca una solicitud de explicaciones más enérgica (que suele implicar a los medios de comunicación para que la gente se interese por la historia). Es en este

¹¹ Este tipo de enfoque ofrece un buen potencial para abordar los riesgos relacionados con conflictos, ya que se ha descubierto que los problemas ambientales y «la ausencia de oportunidades para que los interesados comunitarios otorguen su consentimiento en la fase inicial de los proyectos» son las dos causas directas más comunes de conflicto entre las empresas mineras y las comunidades, según un análisis de 50 casos prácticos realizado por Franks *et al.* en 2014 (Franks, D. M.; Davis, R.; Bebbington, A. J.; Ali, S. H.; Kemp, D.; y Scurrah, M. «Conflict translates environmental and social risk into business costs», *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, vol. 111, n.º 21, 2014. Disponible en: <http://www.pnas.org/content/111/21/7576> [En inglés, último acceso: 10 de octubre de 2014]).

¹² En Sudáfrica: «Water pollution near mines prompts South African probe». Disponible en: <http://www.bloomberg.com/news/2014-05-21/water-pollution-near-mines-prompts-south-african-ombudsman-probe.html> [En inglés, último acceso: 2 de octubre de 2014]. En Brasil: «Degradação ambiental é tema central do Minas de Minas em Paracatu». Disponible en: http://www.conexaonordeste.com.br/portal/notas/ler_cont.php?id=1380 [En portugués, último acceso: 2 de octubre de 2014]. En Colombia: «Colombian town forcibly relocated due to air contamination from open-pit coal mining – Community takes on multinationals in fight for rights». Disponible en: <http://www.asfcanada.ca/fr/blogue/billet/colombian-town-forcibly-relocated-due-to-air-contamination-from-open-pit-coal-mining-community-takes-on-multinationals-in-fight-for-rights/216> [En inglés, último acceso: 2 de octubre de 2014].

momento cuando los organismos gubernamentales encargados de otorgar las licencias ambientales toman algún tipo de medida.

La mala prensa suele ir aumentando según se van desarrollando los acontecimientos, al igual que lo hacen las multas que se le imponen al operario. La cuantía de las multas puede ser considerable: por ejemplo, en Serra do Navio (Brasil) una mina de manganeso contaminó la tierra con arsénico, lo que provocó que al operario se le impusiera una multa de 52 millones de reales (R\$) y se le confiscaran activos como garantía de pago.

Estos problemas no son exclusivos del sector de la minería; hay diversos tipos de infraestructuras de procesamiento que también producen contaminantes y, si estos no se desechan de forma adecuada, pueden provocar conflictos con las poblaciones afectadas. Las columnas de humo que salían de una fábrica de cemento cercana a Matola (Mozambique), por ejemplo, llevaron a que los residentes locales presentaran quejas ante el Ministerio de Medio Ambiente. En esta ocasión, la fábrica tardó nueve años en sustituir los filtros correspondientes, pero este caso demuestra que, incluso en situaciones en las que los organismos regulatorios tardan mucho tiempo en actuar, la gente suele utilizar las vías oficiales antes de intervenir directamente con manifestaciones o bloqueos.

Las empresas pueden demorarse intencionadamente en el cumplimiento de las normas, y rara vez se les obliga a actuar con rapidez. En uno de los casos que analizamos, el organismo de control ambiental exigió a una empresa entregar informes trimestrales de la calidad del agua, pero solo los recibieron dos años más tarde¹³. En cualquier caso, generalmente las empresas solo retrasan lo inevitable: tarde o temprano, tendrán que pagar indemnizaciones, que a menudo ascenderán a cuantías considerables.

La evidente incapacidad o falta de disposición de los organismos regulatorios para hacer que se cumplan sus normas hace aún más sorprendente el hecho de que, en casi todas las situaciones, las contrapartes locales intentaran resolver sus problemas por la vía legal. No se trata de hacer una elección entre presentar una demanda o intervenir sobre el terreno: muchas de las demandas se presentaron ante los tribunales mientras tenían lugar otras formas de protesta (a menudo ilegales)¹⁴.

Sin embargo, se observa cierto escepticismo hacia la capacidad que tienen las oficinas del defensor del pueblo y otras entidades públicas similares para obtener resultados positivos a tiempo. Como

¹³ Villa Verde, R. y Fernandes, F. «Impactos da mineração e da agroindústria em Paracatu (MG): ênfase em recursos hídricos». Disponible en: http://www.cetem.gov.br/publicacao/serie_anais_XVIII_jic_2010/Rodrigo_Verde.pdf [En portugués, último acceso: 2 de octubre de 2014].

¹⁴ Incluso en interrupciones muy breves, que solo duraron unos días, en las que los manifestantes bloquearon carreteras de São Felix do Xingu (Brasil), se tomaron medidas legales que posteriormente acarrearán multas para la empresa correspondiente. Lo mismo ocurrió en Matola (Mozambique), donde los habitantes locales presentaron quejas formales contra una empresa de cemento que vertía residuos no tóxicos.

es sabido, los procesos burocráticos de las economías emergentes suelen ser lentos y puede tardarse décadas en alcanzar la resolución de un caso¹⁵.

En un gran número de casos, las comunidades locales responden a sus preocupaciones simultáneamente con medidas legales e intervenciones directas, lo que significa que, al final, para cuando se resuelve su causa judicial, el proyecto ya habrá sufrido daños y podría ser demasiado tarde para repararlos.

La eficacia de las acciones legales sigue siendo dudosa. Algunas causas acaban acarreado multas para las empresas implicadas¹⁶, mientras que otras suponen una interrupción temporal de las operaciones que puede durar más de un año¹⁷. Por lo tanto, parecer ser que la resolución satisfactoria de los litigios judiciales no puede verse como una solución directa de los conflictos¹⁸.

Las multas no suelen suponer un inconveniente tan grave como para que cambie el comportamiento de una empresa minera, pero la interrupción indefinida de las operaciones puede obligar a las empresas a adoptar un enfoque nuevo en lo que respecta a las contrapartes en disputa. Son frecuentes las victorias parciales, como aquellas en las que las autoridades exigen cambios en la evaluación del impacto ambiental (EIA)¹⁹, y esto puede llevar más de un año en prepararse y tramitarse.

Lo que sí está más claro son las condiciones en las que se han emprendido las acciones legales. Las demandas suelen interponerse cuando ya se han deteriorado las negociaciones con las empresas implicadas.

¹⁵ Iniciativa para los Derechos y Recursos. «¿Qué futuro le aguarda a la reforma de la tenencia forestal? Progreso y ralentización de la reforma de la tenencia forestal desde 2002», marzo de 2014. Disponible en: http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/What-Future-for-Reforms_ESP.pdf [Último acceso: 2 de octubre de 2014].

¹⁶ En São Felix do Xingu (Brasil): «Mineração de níquel expulsa pequenos trabalhadores rurais e povos indígenas no sudeste do Pará». Disponible en: <http://www.confliotoambiental.icict.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=74> [En portugués, último acceso: 2 de octubre de 2014].

¹⁷ En Cerrito y Chitaga (Colombia): <http://ejatlas.org/conflict/paramo-el-almorzadero-colombia> [Último acceso: 2 de octubre de 2014]. En Mpumalanga (Sudáfrica): «Natural water body threatened by large mining company». Disponible en: <http://www.ejolt.org/2012/11/natural-water-body-threatened-by-large-mining-company/> [En inglés, último acceso: 2 de octubre de 2014].

¹⁸ Paracatu (Brasil) es un buen ejemplo: allí, dos comunidades afectadas interpusieron demandas contra Kinross, pero solo una de ellas ganó.

¹⁹ Como se ha observado en Llusco (Perú): <http://ejatlas.org/conflict/chumbivilcas-peru> [Último acceso: 2 de octubre de 2014]. En Santiago de Chuco (Perú): «Barrick se impone en Alto Chicama». Disponible en: http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=25 [Último acceso: 2 de octubre de 2014]. En Quellaveco (Perú): «Oposición de agricultores a la desviación del río Asana para el proyecto Quellaveco». Disponible en: http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=106 [Último acceso: 2 de octubre de 2014]. En Meraukee (Indonesia): <http://www.ejatlas.org/conflict/wilmar-international-sugar-plantations-in-merauke-papua-indonesia> [En inglés, último acceso: 2 de octubre de 2014].

Aunque algunas acciones legales tienen un resultado satisfactorio, es sumamente improbable que una demanda suponga el cierre permanente de un proyecto²⁰. Se han dado casos de paralizaciones totales cuando no se llegó a obtener la aprobación de las comunidades locales que tenían derechos legalmente reconocidos sobre la tierra²¹, o cuando las autoridades cambiaron la categoría de la tierra bajo disputa y la convirtieron en un área protegida²², pero nunca por fallos judiciales.

El ejemplo del proyecto minero que acabó cerrándose en Jesús, Pedro Gálvez y Cachachi (Perú) indica cómo podrían evitarse conflictos si se trata a las comunidades locales como contrapartes. Las empresas mineras consiguieron sus permisos de prospección en asambleas comunitarias, pero sin el consentimiento de los propietarios de las tierras correspondientes. El carácter legal que se otorga a las contrapartes en un contrato claramente implica la necesidad de tener la certeza de quién tiene los derechos y responsabilidades en cuestión. En los conflictos que hemos analizado, esta certeza rara vez incluía a las comunidades locales.

En algunos casos (como en Jesús, Pedro Gálvez y Cachachi), los miembros de la comunidad local ya tenían unos derechos sobre la tierra que podían haberse incluido en el contrato. En los MEF no siempre existen derechos como estos, pero la regularidad con la que hemos observado que se demanda a las empresas por las normas ambientales indica que el reconocimiento de los derechos que tienen las partes locales sobre un área podría ser fundamental para evitar costosos conflictos con ellas.

En Santiago de Chuco (Perú) las organizaciones comunitarias locales consiguieron demostrar que Barrick Gold era responsable de la contaminación de su fuente de agua y obligaron a la empresa a gastarse millones de dólares intentando solucionarlo. Esta situación despertó interés a nivel federal

²⁰ En muchos casos, con las demandas se consiguió suspender operaciones hasta que la empresa implicada cumpliera ciertas condiciones. Las opiniones expresadas en este argumento no ponen en entredicho la importancia de las demandas: estas son una buena herramienta para evitar que se lleve a cabo un proyecto, y en alguna ocasión llevan al cierre de una mina.

De entre los casos que observamos (que, por supuesto, no son la totalidad de los casos), se cerraron permanentemente cerca de 10 proyectos y ninguno fue como resultado de un fallo judicial. En otros casos, hemos visto empresas que se han visto obligadas a detener permanentemente sus operaciones como resultado de un fallo pero generalmente la empresa intenta arreglar los problemas y apelar. Normalmente como sí que terminan permanentemente los proyectos es si no cuentan con EIA aprobadas o no han obtenido el consentimiento de las comunidades locales.

Por supuesto, hay otros motivos por los que pueden cerrarse minas, como cuando el Gobierno de Filipinas prohibió las minas a cielo abierto, provocando así que una de las mayores inversiones extranjeras tuviera que cambiar de planes.

²¹ Esto es especialmente importante en el caso de la minería, ya que la obtención de la licencia social para operar se considera el tercer riesgo más grave al que se enfrentan los proyectos, según el informe de Ernst and Young titulado «Business risks in mining and metals 2014-15». Disponible en: <http://www.ey.com/GL/en/Industries/Mining--Metals/Business-risks-in-mining-and-metals> [En inglés, último acceso: 2 de octubre de 2014].

²² Un ejemplo es la creación de una Reserva de Extracción en São Luís (Brasil), que obligó a rediseñar un complejo industrial. Véase: «MPF/MA quer a conclusão de processo que propões a criação de reserve extrativista do Tauá-Mirim na zona rural de São Luís». Disponible en: <http://www.prma.mpf.gov.br/noticia4739> [En portugués, último acceso: 2 de octubre de 2014].

y Barrick se vio obligada a modificar la EIA del proyecto, lo que provocó la suspensión de las operaciones durante ocho meses.

La eficiencia de los procesos gubernamentales también parece ser importante. Desde el punto de vista legal, hay una estrecha relación entre el momento en que ocurre una pérdida financiera y el tiempo que les lleva a las autoridades tramitar las quejas y alcanzar veredictos o acuerdos.

Todos los países analizados tenían un sistema judicial lento y burocrático. Esto puede tener diferentes repercusiones para las empresas. Por un lado, una única demanda puede interrumpir todo el proyecto durante casi un año, e incluso aumentar las probabilidades de similares demandas en el futuro (bien contra la operación en cuestión o bien contra otras operaciones controladas por la misma empresa).

Por otro lado, algunas acciones legales pueden ser útiles para las empresas que realmente quieran solucionar su problema. Esto se debe a que, cuando una contraparte interpone una demanda, pasa bastante tiempo hasta que el tribunal dicta un fallo, lo cual supone un amplio plazo para llevar a cabo negociaciones fuera del contexto legal.

Patrón principal n.º 3: contrapartes fiables

Cuando las negociaciones se estructuran de tal manera que se incluye a las poblaciones locales, parece que muchas empresas simplemente «pasan el trámite» para cumplir algún requisito, pero no consideran a estos habitantes como contrapartes genuinas. Algunos datos hacen pensar que muchas empresas creen realmente que el mero hecho de informar a los habitantes locales sobre un proyecto es suficiente para cumplir sus obligaciones.

Si el proyecto implica algún tipo de indemnización, se da la correspondiente creencia de que hacer una oferta constituye ya «responsabilidad social», y que los beneficiarios deberían estar agradecidos independientemente de lo que reciban. En Yekepa (Liberia), por ejemplo, ArcelorMittal puso de relieve el valor del orgullo nacional de los ciudadanos de Liberia por verse involucrados en la reconversión de una mina de mineral de hierro²³. También hay concesionarios que intentan evitar las negociaciones formales y acuerdos de indemnización mediante sobornos²⁴.

²³ BBC. «Digging for truth in Liberia's mines», 2012. Disponible en: http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_9731000/9731458.stm [En inglés, último acceso: 2 de octubre de 2014].

²⁴ Dejando a un lado cuestiones legales y éticas, es importante mencionar que los sobornos no tienen la eficacia que presuponen los que los consideran como una solución rápida. En Itaituba (Brasil), por ejemplo, la tribu de los mundurukus consiguió detener la construcción de unas minas cercanas a su territorio tras unos supuestos intentos de soborno. Véase: «Munduruku e ribeirinhos lutam pela vida e contra complexo de hidrelétricas em seu território». Disponible en: <http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=432> [En portugués, último acceso: 2 de octubre de 2014].

Estas prácticas no solo van en contra del fundamento de las directrices existentes, como las publicadas por el Consejo Internacional de Minería y Metales²⁵, sino que, además, nuestro análisis parece indicar que el mero hecho de sentar a la población local en la mesa de negociaciones no reduce las posibles pérdidas. Parece ser que también es bastante importante aplicar ciertos estándares de construcción, ejecución y monitoreo del proceso.

De hacerse adecuadamente, estos estándares deberían abordar una variedad de asuntos²⁶. Entre ellos se encuentran: garantizar que en la empresa siempre haya un punto de contacto que genere confianza entre los habitantes locales durante años; cumplir las expectativas (por ejemplo, de empleo) de la comunidad o tratar a la comunidad como iguales; e incluso prever contingencias en su presupuesto tras las consultas para la modificación de un proyecto, ya que los proyectos generalmente se diseñan antes de tener en cuenta a las poblaciones locales²⁷.

Nosotros estamos en fase de elaboración de unas directrices pero, de momento, nuestra intención es centrarnos en asegurar la posición de las poblaciones locales como una contraparte fiable. En parte, esto se debe a que creemos que es posible diseñar un proceso que pueda reproducirse y aplicarse a escala en diferentes jurisdicciones y proyectos sin perder de vista las diferencias de base que hacen que cada concesión sea única.

Esta manera de pensar se corresponde con las recomendaciones de diversas ONG que defienden los derechos locales. En este sentido, nuestras conclusiones se corresponden con su visión del mundo.

Nuestra máxima preocupación es la implementación. Las normas que ya existen tienden a ser complejas y difíciles de entender, requieren mucho tiempo y dependen de la presunción de que hay gente disponible para facilitar el debate entre las contrapartes.

Es más, estas directrices parecen asumir que las empresas son las únicas culpables de los problemas que surgen. Nuestro análisis de las pruebas apunta hacia un panorama mucho menos claro, en el que la culpa de los resultados disfuncionales puede recaer igualmente sobre las organizaciones locales. Esta conclusión resulta razonable: al igual que una mala gestión ejecutiva puede conllevar que un buen trabajo no traiga consigo rentabilidad, un mal liderazgo local también puede conllevar que no se consigan los objetivos de la comunidad correspondiente.

²⁵ Consejo Internacional de Minería y Metales. «Guía de buenas prácticas: los pueblos indígenas y la minería», 2010. Disponible en: <http://www.icmm.com/document/1589> [Último acceso: 2 de octubre de 2014].

²⁶ Consejo Internacional de Minería y Metales. «Kit de herramientas de desarrollo comunitario», julio de 2012. Disponible en: <http://www.icmm.com/document/4998> [Último acceso: 2 de octubre de 2014].

²⁷ Esto es especialmente pertinente en aquellas situaciones en las que las contrapartes locales se oponen rotundamente a alguna parte de un proyecto, como la construcción de un edificio o el trazado de una carretera nueva. Modificar características como estas es relativamente fácil dada la magnitud del proyecto entero, pero hay empresas que en ese momento podrían estar pasando por dificultades económicas, o contar con un presupuesto limitado.

Por ejemplo, la expansión de la mina de carbón de El Cerrejón requería el reasentamiento de toda una comunidad. Los líderes locales no consiguieron alcanzar un acuerdo para toda la población afectada con el operario de la mina y decidieron llevar a cabo tratos individuales entre la empresa y los miembros de la comunidad, lo cual dividió a la población. Además, aquellas personas que no siguieron a sus líderes y se quedaron en el área bajo disputa se enfrentaron a una presión cada vez mayor por parte de la empresa, incluido el desvío de un río cercano²⁸.

En otros casos, el problema puede residir en algún líder en concreto. En Mozambique, por ejemplo, la consulta a la comunidad local sobre la plantación de teca de Tectona consistió en una negociación con un único jefe, que supuestamente aceptó sobornos para evitar que las operaciones de aprovechamiento de madera se vieran interrumpidas²⁹. Existen otras acusaciones de mala conducta contra este jefe, incluida la venta ilegal de tierras a la empresa maderera.

En cualquier caso, nosotros creemos que hay razones para ser optimistas respecto al liderazgo comunitario. Nuestros casos prácticos incluían varias situaciones en las que los líderes locales habían logrado resultados positivos para sus comunidades y habían superado obstáculos para colaborar con los concesionarios.

En Suárez (Colombia), unos jóvenes líderes locales se opusieron a varias concesiones mineras de oro cercanas a su territorio³⁰ y sus campañas funcionaron: todas las concesiones mineras de la región se interrumpieron hasta que se obtuviera el debido consentimiento libre, previo e informado. Actualmente hay varias empresas mineras que operan en la región gracias a que han cumplido este requisito.

Dicho esto, debemos añadir una advertencia: parece que a menudo los plazos vencen. Los conflictos que surgen de una negociación inapropiada con las contrapartes se dan en diferentes etapas de desarrollo de los proyectos y hay suficientes muestras que indican que muy pocas negociaciones se resuelven en el plazo esperado. En Perú, las negociaciones se interrumpen permanentemente con tanta frecuencia que la oficina del defensor del pueblo prefiere publicar sus informes solo cuando aún hay diálogos abiertos entre las partes en disputa^{31, 32}.

²⁸ Environmental Justice Atlas. «El Cerrejón mine, Colombia», 2014. Disponible en: <http://ejatlas.org/conflict/el-cerrejn-mine-colombia> [Último acceso: 2 de octubre de 2014].

²⁹ «Lords of the land: preliminary analysis of the phenomenon of land grabbing in Mozambique». Disponible en: <http://www.open.ac.uk/technology/mozambique/sites/www.open.ac.uk.technology.mozambique/files/pics/d131619.pdf> [En inglés, último acceso: 2 de octubre de 2014].

³⁰ http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=84 [Último acceso: 2 de octubre de 2014].

³¹ Listado de conflictos sociales activos en Perú, divididos por región: <http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/conflictosactivos.php?ot=1> [Último acceso: 2 de octubre de 2014].

³² En lo que respecta a la minería, Perú es el país más problemático de los que analizamos. Menos del 2 % de la totalidad de las concesiones mineras está plenamente operativo, aunque los motivos para ello no se limitan a los conflictos con las poblaciones

A menudo surgen los problemas adicionales de tener que reasentar a las poblaciones y reasignarles tierras³³. En algunas ocasiones, la responsabilidad del reasentamiento recae conjuntamente sobre el Gobierno local y el regional, y esto prolonga los plazos originalmente acordados debido a una falta de eficacia y personal, o a malas conductas intencionadas.

Si se respalda con más pruebas, este hallazgo implicaría que incluso es probable que las buenas prácticas de negociación de acuerdos comunitarios solo funcionen en aquellos lugares en los que se disponga de contrapartes eficaces³⁴.

CONCLUSIONES

En última instancia, el denominador común de los 100 acontecimientos diferentes que analizamos es la interacción entre dos partes: la empresa que explota una concesión y la población local.

La representación de la empresa consiste en gente que nunca antes ha estado en un espacio específico, el cual generalmente se determina con ayuda de algún miembro de la élite nacional. El objetivo de la empresa es gestionar los recursos naturales de ese espacio para obtener beneficios. El plazo típico que usan las empresas para juzgar el éxito de un proyecto varía entre una y tres décadas, pero los profesionales con grandes aspiraciones suelen tener planes a un plazo más corto.

En cambio, la población local tiene una relación de dependencia arraigada con ese espacio, que va más allá del aspecto económico. En los MEF la opinión que tiene el pueblo de las élites suele ser negativa y, en general, esto se debe a las injusticias que han sufrido en el pasado a manos de estos grupos. Además, los habitantes locales tienden a defender con agresividad lo que podría ser su único activo, e incluso el único legado que podrían dejar como herencia a sus hijos y sus nietos.

locales: «Less than 2% of Peru's total mining concessions are active». Disponible en: <http://www.mining.com/less-than-2-of-perus-total-mining-concessions-are-active/> [En inglés, último acceso: 2 de octubre de 2014].

³³ En Mozambique: «New coal giant Mozambique faces rising public anger». Disponible en: <http://www.minnpost.com/christian-science-monitor/2012/04/new-coal-giant-mozambique-faces-rising-public-anger> [En inglés, último acceso: 2 de octubre de 2014]. En Indonesia: «Conflicts between community and British-owned plantation in Kalimantan». Disponible en: <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/conflicts-between-community-and-british-owned-plantation-company-kalimantan> [En inglés, último acceso: 2 de octubre de 2014]. En Colombia: «El espejismo de Marmato». Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-espejismo-de-marmato-articulo-302997> [Último acceso: 2 de octubre de 2014].

³⁴ El estándar de «eficacia» que usamos actualmente consiste en que la organización consiga los objetivos de la comunidad y, en los casos que hemos analizado, esto suele conllevar la interrupción de las operaciones. Esto se debe a que nuestra selección de casos actual se centra en aquellas situaciones en las que los intereses de las poblaciones locales y los de las empresas discrepan. Por supuesto, un modelo más funcional consistiría en involucrar a estas organizaciones con el fin de fomentar la inversión. Durante los próximos meses buscaremos ejemplos para ilustrar este modelo.

The Munden Project

El modelo típico de concesión no contempla a estas personas. En nuestra opinión, es poco probable que las prácticas gubernamentales cambien en un periodo de tiempo razonable y, por lo tanto, corresponde a las propias empresas adoptar el compromiso necesario.

Si tratan a todas las comunidades afectadas como contrapartes de un acuerdo de concesión, es posible que las empresas puedan tratar más eficazmente con los representantes comunitarios aquellos asuntos que generalmente provocan problemas. Pensar en las comunidades de esta forma también debería ayudar a determinar todas las condiciones necesarias para operar de hecho, no solo en teoría, ya que haría que los acuerdos por los cuales se otorgan las concesiones fueran más fieles a la realidad sobre el terreno.

Nuestra selección de casos prácticos solo muestra una cara de la moneda: la fallida. Aún hay lecciones que aprender. No obstante, si los patrones que hemos observado se confirman con otros estudios, las implicaciones de cómo deberían las empresas gestionar los riesgos derivados de conflictos con las comunidades serían simples.

Primero, deberían dedicarse más recursos a la prevención del riesgo de conflictos en la fase inicial de los proyectos nuevos, o en las primeras etapas de las expansiones que se hayan previsto. Al igual que con cualquier otra contraparte que tiene la capacidad de alterar el éxito de las operaciones, sería aconsejable asegurarse de que las comunidades locales den su consentimiento expreso al funcionamiento de las operaciones antes de comenzar (o ampliar) los proyectos.

Segundo, los riesgos pueden reducirse cumpliendo unas normas ambientales estrictas. Merece la pena gestionar estas normas con mucho cuidado y atención, aunque solo sea porque la relación con el medio ambiente suele ser primordial para las contrapartes locales, y casi siempre está protegida por la ley.

Por último, deben dedicarse más tiempo y recursos a la identificación de contrapartes fiables y al establecimiento de relaciones con ellas. Los conflictos empresa-comunidad solo pueden reducirse si se interactúa con representantes de las poblaciones locales que sean dignos de confianza, y una parte fundamental del proceso de diligencia debida de las empresas debería consistir en una evaluación de la credibilidad de diferentes agentes locales como representantes de las comunidades afectadas.

Con el fin de lograr estos tres objetivos, deben elaborarse unas directrices operativas claras y flexibles. Utilizando este estudio como punto de partida, tenemos la intención de publicar dichas directrices en 2015, comenzando por el sector de la minería.

APÉNDICE A: DENSIDAD DE LA POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LAS CONCESIONES EN LOS DISTINTOS SECTORES DE CONCESIÓN

La Tabla 1 se creó originalmente para nuestro estudio de investigación paralelo titulado «Forest Loss, Concessions, and Communities: An Investment Perspective». Se han puesto a disposición del público otros archivos con todos los datos pertinentes.

Se compararon los datos de población de toda una serie de MEF con las ubicaciones de sus concesiones. En total, analizamos 72 907 archivos en formato Shapefile de concesiones de diferentes tamaños e industrias, incluidas la minería, petróleo/gas, agricultura y explotación forestal. Sobre estos archivos sobrepusimos dos bases de datos de población mundial. Además, analizamos el porcentaje del territorio de diferentes países que cubrían las concesiones analizadas, como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2: comparación del tamaño total de las concesiones analizadas y la superficie total de los países

País	Concesión	Superficie (km ²)	Superficie del país (km ²)	% del país bajo concesión	
				por tipo de concesión	total del país
Brasil	explotación forestal	59 130,02	8 514 877	0,69 %	3,51 %
	petróleo y gas	239 832,62		2,82 %	
Camboya	aceite de palma, caucho, mandioca, azúcar	21 700,00	181 035	11,99 %	14,17 %
	minería	3 944,64		2,18 %	
Colombia	minería	53 181,67	1 138 910	4,67 %	18,36 %
	petróleo	155 903,06		13,69 %	
Filipinas	madera	5 052,82	1 904 569	8,15 %	30,80 %
	minería	14 867,64		15,88 %	
	aceite de palma	155 245,18		6,76 %	
Indonesia	tala	302 505,81	111 369	6,21 %	35,62 %
	fibra leñosa	128 829,03		29,41 %	
Liberia	agricultura	6 911,93	799 380	3,83 %	3,83 %
Mozambique	tala	32 758,16	1 285 216	6,17 %	42,99 %
	agricultura (biocarburante)	30 585,04		21,00 %	
	explotación forestal	79 351,73		15,82 %	
Perú	minería	269 894,01	300 000	1,68 %	6,64 %
	petróleo y gas	203 258,17		4,96 %	

Entre algunas concesiones se dan superposiciones, pero esto no afecta a los resultados de manera significativa. El país con la mayor superposición es Perú, donde hay una diferencia de un 1,45 % de la superficie total del país.

Bases de datos utilizadas:

Áreas bajo concesión: son las áreas donde hay un derecho legal sobre los recursos naturales. En nuestro análisis hemos incluido concesiones de aceite de palma, agricultura, explotación forestal, tala, petróleo y gas, y minería, siempre que los datos estuvieran disponibles y accesibles. Los datos se descargaron de varias fuentes que se encuentran a disposición del público. Si no se disponía de los datos de las concesiones en formato GIS (esto es, Shapefile o mapa de bits), los datos disponibles se georreferenciaron, digitalizaron y convirtieron a formato GIS para analizarlos en superposición.

The Munden Project

Población: comparamos los datos de dos fuentes diferentes: la base de datos de Oakridge National Laboratories' LandsatTM (Landsat – disponible en: <http://web.ornl.gov/sci/landsat/> [En inglés, último acceso: 10 de octubre de 2014]), y los datos del Socio Economic Data and Applications Centre (SEDAC – disponible en: <http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/gpw-v3> [En inglés, último acceso: 10 de octubre de 2014]). La diferencia entre las cifras que arrojan ambas fuentes se debe principalmente a la resolución espacial de los datos: los de Landsat están a una resolución de 1 km x 1 km y los de SEDAC a una de 5 km x 5 km.

APÉNDICE B: OBSERVACIONES METODOLÓGICAS

En el Apéndice C incluimos una lista exhaustiva de los casos que hemos analizado hasta la fecha. Nuestra metodología para analizarlos ha sido necesariamente oportunista y, por lo tanto, requiere explicación.

Para encontrar casos en los que se habían interrumpido o alterado de alguna forma las operaciones de las empresas, examinamos noticias de periódicos, bases de datos públicas, mapas de conflictos, blogs y publicaciones científicas. Buscábamos operaciones de gran envergadura, las cuales tienen una gran representación en los sectores de la minería y la energía, pero también analizamos algunas explotaciones agrícolas de gran tamaño.

Las grandes inversiones de agroindustria muy a menudo operan en áreas remotas con poca cobertura mediática. Los periódicos locales incluyen información, pero no la suficiente para entender bien el suceso. Los blogs locales ofrecen opiniones más detalladas pero menos fiables sobre los factores que motivan el inicio y desarrollo de los conflictos³⁵. Analizamos estos blogs en aquellos casos que no eran lo suficientemente significativos para aparecer en las noticias regionales o nacionales, o cuando era evidente que eran la mejor fuente disponible.

Otra forma que usamos para encontrar conflictos fue la consulta de bases de datos públicas sobre causas judiciales abiertas. Perú es el mejor ejemplo de cómo funciona este sistema, ya que la oficina del defensor del pueblo del país publica informes mensuales con información detallada sobre todas las causas del país relacionadas con la tenencia de la tierra que están abiertas o se han cerrado recientemente³⁶. Este tipo de fuentes nos resultaban muy útiles para identificar las áreas más propensas a sufrir conflictos y posteriormente buscar más información en los medios de comunicación locales y publicaciones científicas.

Hay organizaciones que se dedican a identificar los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra y los recursos, enumerarlos, trazar los mapas correspondientes y, en algunas ocasiones, ofrecer asistencia^{37, 38}. Al igual que en el caso de las bases de datos públicas, estas fuentes requieren

³⁵ Paracatu (Brasil) es un buen ejemplo: allí los periódicos solo tenían algún artículo cada mes sobre el conflicto entre Kinross y los habitantes locales, mientras que un blog local llamado «Alerta Paracatu» contenía una gran cantidad de opiniones detalladas y documentos pertinentes. Disponible en: <http://alertaparacatu.blogspot.com/> [En portugués, último acceso: 2 de octubre de 2014].

³⁶ De todos los países analizados, Perú tenía la mejor base de datos pública. Sus informes mensuales no solo especifican los casos abiertos, sino que también incluyen información detallada breve pero útil sobre la interacción entre las empresas implicadas y las contrapartes locales. Disponible en: <http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php> [Último acceso: 2 de octubre de 2014].

³⁷ Aquí destacan dos organizaciones brasileñas: Fiocruz y la Comisión Pastoral de la Tierra (Comissão Pastoral da Terra o CPT). La primera enumeró casi 350 conflictos de tenencia y trazó sus mapas (de estos, usamos aproximadamente 25), mientras que CPT es una organización religiosa que participa activamente en más de 500 casos, con el objetivo de otorgar a los pobres los derechos de tenencia. Véanse: <http://www.conflictoambiental.icict.fiocruz.br/index.php> [En portugués, último acceso: 2 de octubre de 2014] y <http://cptnacional.org.br/> [En portugués, último acceso: 2 de octubre de 2014].

una investigación complementaria para identificar las pérdidas que podrían sufrir las empresas implicadas en los conflictos.

Hemos examinado la información que se encuentra a disposición del público para determinar las causas y los tipos de conflicto; la relación entre los conflictos y las operaciones comerciales; y las consecuencias financieras resultantes³⁹. Los sectores analizados incluían la minería, petróleo y gas, fabricación de automóviles y agricultura.

Debemos aclarar que no estamos analizando la violencia que surge de cualquier tipo de conflicto relacionado con la tierra: el propósito de nuestro trabajo consiste en identificar y comprender los conflictos directamente relacionados con grandes explotaciones, principalmente en los sectores de la agricultura, minería y energía. Por lo tanto, excluimos a los terratenientes amenazados por guerrillas⁴⁰, las regiones afectadas por grupos reformistas como el Movimiento de Campesinos sin Tierras (MST) de Brasil⁴¹, o las áreas que viven una guerra civil, como es el caso de Liberia antes de 2003⁴². Todos estos casos requieren un análisis diferente, que incluya valoraciones del riesgo político.

Se consideró que un factor importante eran los diferentes niveles de legislación en materia de tenencia de los diez países analizados. La distinta legislación de la tenencia de la tierra y las distintas capacidades para hacer que se cumpla desempeñan un papel principal en la evolución de los conflictos. Nosotros utilizamos el análisis que realizó RRI de la reforma de la tenencia forestal como guía para saber la gestión que hacen algunos países de los derechos sobre la tierra y los recursos que tiene su población⁴³. Establecer tendencias comunes entre los países analizados ha resultado complicado, ya que el régimen de tenencia de la tierra de cada uno de ellos evoluciona a un ritmo diferente.

³⁸ El Environmental Justice Atlas se consultó también con regularidad para investigar sobre Mozambique, Liberia, Indonesia y Colombia. Disponible en: <http://ejatlas.org/> [En inglés, último acceso: 2 de octubre de 2014].

³⁹ Es importante poner de relieve la importancia de las repercusiones financieras. Por eso, no hemos incluido aquellos casos en los que las empresas ganaron todas las batallas que lidiaron sin recibir ningún tipo de castigo. Estos casos no son excepcionales, y su conclusión puede atribuirse a diversos motivos, entre otros, la corrupción, el hecho de que los Gobiernos no reconocieran los derechos comunitarios, una fuerte presión política o la falta de pruebas para condenar a las empresas (también hay casos en los que las demandas de la comunidad no son correctas, lo cual lleva a litigios judiciales que fracasan).

⁴⁰ «Land and violence in Colombia: This land is our land». Disponible en: <http://www.economist.com/node/17043061> [En inglés, último acceso: 2 de octubre de 2014].

⁴¹ Barros, C.; Faria, J.; y De Araujo Jr., A. «Brazilian Land Tenure Conflicts: a spatial analysis». *Journal of International Development*, 26, 409-421, 2014.

⁴² Brottem, L. y Unruh, J. «Territorial Tensions: Rainforest Conversation, Postconflict Recovery, and Land Tenure in Liberia». *Annals of the Association of American Geographers*, 99:5, 995-1002, 2009.

⁴³ Iniciativa para los Derechos y Recursos. «¿Qué futuro le aguarda a la reforma de la tenencia forestal? Progreso y ralentización de la reforma de la tenencia forestal desde 2002», marzo de 2014. Disponible en: http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/What-Future-for-Reforms_ESP.pdf [Último acceso: 2 de octubre de 2014].

Aunque en las últimas décadas se han dado algunos avances significativos en el reconocimiento legal de la tenencia comunitaria de la tierra, hay algunos países que siguen sin tener los medios necesarios para superar su tradicional burocracia. En Brasil, por ejemplo, la ley federal que reconoce los derechos de los quilombolas data de 1995, pero para 2013 solo un 7 % de los 3 000 grupos relevantes había obtenido derechos sobre la tierra⁴⁴. Los países latinoamericanos que analizamos han progresado mucho en su reconocimiento de la existencia de sus comunidades tradicionales y la concesión de derechos sobre la tierra a dichas comunidades. No obstante, la mayoría de los países de África y el sureste de Asia siguen a la zaga⁴⁵ y, al no ofrecer protección legal, obligan a sus comunidades a depender de la buena voluntad de unos sistemas judiciales limitados cuando surgen disputas.

Es importante que nuestros lectores tengan en cuenta la cronología de los casos analizados. Nuestro plan original era analizar acontecimientos que habían comenzado a partir de 2007 pero, con el fin de aumentar el tamaño de la muestra, ampliamos nuestro ámbito de estudio para abarcar conflictos que habían comenzado a partir de 1999. En un gran número de estos casos, las disputas habían resurgido tras años de armonía, generalmente cuando el impacto de un proyecto comercial sobre las contrapartes locales no se había calculado correctamente en las negociaciones iniciales⁴⁶.

⁴⁴ Se están tramitando cientos de reivindicaciones, pero puede llevar muchos años resolverlas. Véase: http://www.cpisp.org.br/terras/html/por_que_as_titulacoes_nao_acontecem.aspx [En portugués, último acceso: 2 de octubre de 2014].

⁴⁵ Iniciativa para los Derechos y Recursos. «¿Qué futuro le aguarda a la reforma de la tenencia forestal? Progreso y ralentización de la reforma de la tenencia forestal desde 2002», marzo de 2014. Disponible en: http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/What-Future-for-Reforms_ESP.pdf [Último acceso: 2 de octubre de 2014].

⁴⁶ Un ejemplo es la mina de El Cerrejón (Colombia): allí los múltiples cambios de propiedad de la mina afectaron tanto al tamaño del proyecto como a la relación con los líderes locales. Véase: <http://ejatlas.org/conflict/el-cerrejn-mine-colombia> [Último acceso: 2 de octubre de 2014].

The Munden Project

APÉNDICE C: DESGLOSE Y LISTA COMPLETA DE LOS CASOS PRÁCTICOS

Casos desglosados

Tabla 3: número de casos por industria

Sector \ País	Brasil	Camboya	Colombia	Filipinas	India	Indonesia	Liberia	Mozambique	Perú	Sudáfrica	Total
Acuicultura	3										3
Agricultura		1				4	3	3			11
Automóviles					1						1
Bebidas					1						1
Caucho	1										1
Construcción								1			1
Energía	7		1	3				1	1	1	14
Explotación forestal (madera)	2	1						5	1		9
Ganadería	1										1
Gestión de residuos										1	1
Industria alimentaria	1										1
Industria naval	1										1
Infraestructura		1	1	1							3
Metalurgia					1						1
Minería	12		6	6			1		17	3	45
Múltiples sectores	1										1
Petroquímica	1										1
Pulpa y papel	3									1	4
Total	33	3	8	10	3	4	4	10	19	6	100

Tabla 4: número de casos por fase del proyecto

País	Total de casos	Etapa en que ocurrió el conflicto			
		Comienzo	Transcurso	Expansión	Finalización
Brasil	33	20	6	6	1
Colombia	8	5	2	1	0
Perú	19	11	2	6	0
Liberia	4	2	1	1	0
Mozambique	10	7	2	1	0
Sudáfrica	6	2	3	1	0
India	3	2	1	0	0
Filipinas	10	7	3	0	0
Camboya	3	2	0	1	0
Indonesia	4	2	2	0	0

LISTA COMPLETA DE LOS CASOS ANALIZADOS

BRASIL

Lugar: Paracatu (Minas Gerais)

Suceso: La operación de extracción de oro de Kinross (la mayor de Brasil que funciona a pleno rendimiento) se vio interrumpida por un conflicto prolongado con los quilombolas (las comunidades «tradicionales»). La empresa amplió sus operaciones en 2008 con una inversión de 570 millones de dólares estadounidenses (US\$) y supuestamente invadió un territorio de los quilombolas en el proceso. Una serie de denuncias ambientales obligaron a la empresa a adoptar medidas y destinar fondos a la solución de los problemas, pero lo que provocó verdaderas interrupciones fueron los conflictos de tenencia con las comunidades tradicionales y la ocupación de su territorio.

Las operaciones se interrumpieron en mayo de 2010 por decisión judicial y se retomaron una vez alcanzado un acuerdo en marzo de 2011.

Empresas afectadas: Kinross, con el nombre de Rio Paracatu Mineração. Esta empresa extrae aproximadamente 40 toneladas de oro al año de sus operaciones brasileñas, lo que representa un 20 % de su extracción anual mundial. La paralización duró 10 meses y afectó solo al área que reivindicaban las comunidades tradicionales. No se dispone de una cifra específica de la pérdida.

<http://www.conflitoambiental.iciet.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=219> (en portugués)

http://www.kinross.com.br/quem_somos.php?id_category=16 (en portugués)

<http://paracatunoticias.com/?p=920> (en portugués)

<http://www.conflitoambiental.iciet.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=74> (en portugués)

<http://blogamaurijr.wordpress.com/2011/10/06/ourilandia-colonos-fecham-estradas-que-da-acesso-a-vale/> (en portugués)

Lugar: São Felix do Xingu (Pará)

Suceso: Tanto una decisión judicial como varias manifestaciones, provocadas por una falta de negociaciones transparentes y adecuadas con los campesinos locales, detuvieron las operaciones de níquel de Vale. En 2005 esta empresa minera instaló una planta de procesamiento de níquel en un territorio bajo disputa, donde vivían varios miles de familias. El proceso de indemnización no salió bien, ya que hubo acusaciones de coacción por parte de la empresa local de Vale, Onça Puma. INCRA (el Instituto Nacional para la Colonización y la Reforma Agraria) interpuso una demanda contra la empresa en 2008 por no haber adoptado las medidas adecuadas para negociar con los campesinos locales y exigió la suspensión de las operaciones mineras. Los trabajadores rurales cerraron algunas carreteras durante tres días en septiembre de ese año, lo cual tuvo como consecuencia negociaciones con Vale y la firma de un acuerdo. Desde entonces se desataron muchos conflictos más y uno de ellos trajo consigo multas, pero nunca la interrupción de las operaciones.

Empresas afectadas: Vale, con el nombre de Onça Puma. Esta mina produce 53 000 toneladas de níquel al año.

<http://www.conflitoambiental.iciet.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=74> (en portugués)

<http://blogamaurijr.wordpress.com/2011/10/06/ourilandia-colonos-fecham-estradas-que-da-acesso-a-vale/> (en portugués)

Lugar: Boca do Acre (Amazonas)

Suceso: Recolectores de caucho exigieron por la vía judicial que se les devolviera su territorio. En mayo de 2009, un importante ganadero reivindicó la posesión de un área en la que vivían 105 familias, lo que las obligó a reasentarse en las cercanías. Para finales de diciembre de ese mismo año, una orden judicial devolvió a los recolectores de caucho su territorio y cerró permanentemente las operaciones ganaderas.

Empresas afectadas: Fazenda Caçula

<http://www.conflitoambiental.iciet.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=486> (en portugués)
<http://portaldopurus.com.br/index.php/melhores-noticias/4089-moradores-do-seringal-macapa-oferecem-denuncia-contrafazendeiro-ao-ministerio-publico> (en portugués)

Lugar: Barreirinha (Amazonas)

Suceso: Las tierras de los quilombolas recibieron reconocimiento legal, lo que obligó a las empresas pesqueras y ganaderos a abandonar el territorio. Tuvieron que esperar 6 años hasta que se tomara una decisión favorable pero, para finales de 2013, el Ministerio Público anunció su decisión definitiva.

Empresas afectadas: empresas pesqueras oficiales, ganaderos y madereros (sin especificar)

<http://www.conflitoambiental.iciet.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=474> (en portugués)

Lugar: Lábrea (Rondônia)

Suceso: Las comunidades indígenas cuestionaron la construcción de una central hidroeléctrica y obtuvieron un importante apoyo público, lo que provocó la interrupción de las operaciones, hasta que se alcanzó un acuerdo. Las interrupciones duraron 3 meses en 2010.

Empresas afectadas: Energia Sustentável do Brasil

<http://www.conflitoambiental.iciet.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=463> (en portugués)
<http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/noticia/83674> (en portugués)

Lugar: Codajás, Coari, Iranduba, Anori, Caapiranga, Anamá, Manaus (Amazonas)

Suceso: Las comunidades que viven cerca de los ríos del Amazonas (los *ribeirinhos*) y una tribu indígena denunciaron la construcción de un gasoducto que perjudicaría a su territorio. La región contiene un 24 % de todas las reservas naturales de gas del país. En 2002, se llevaron a cabo varias audiencias públicas, pero no se alcanzó ningún acuerdo. Las comunidades alegaban que las medidas descritas en la evaluación del impacto ambiental (EIA) no eran suficientes para mitigar los problemas causados. En 2004 se alcanzó un acuerdo beneficioso para todas las partes y, dos años más tarde, comenzó la construcción. A finales de 2006, el Departamento de Justicia Federal determinó la interrupción de las operaciones por la falta de la licencia ambiental adecuada. Al mes siguiente se anuló la decisión.

Empresas afectadas: Petrobrás

[http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI1216118-EI306,00-](http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI1216118-EI306,00-Justica+suspende+obras+do+Gasoduto+CoariManaus.html)

[Justica+suspende+obras+do+Gasoduto+CoariManaus.html](http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI1216118-EI306,00-Justica+suspende+obras+do+Gasoduto+CoariManaus.html) (en portugués)

<http://pib.socioambiental.org/en/noticias?id=11000> (en portugués)

<http://www.conflitoambiental.iciet.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=9> (en portugués)

Lugar: Serra do Navio (Amapá)

Suceso: La mayor parte del municipio se vio afectado por el cierre de una mina de manganeso. La empresa encargada no se deshizo adecuadamente de los residuos, que contaminaron de arsénico una superficie extensa de tierra. En 2001 a la empresa se le impuso una multa de 52 millones de reales (R\$) por daños ambientales. El Gobierno estatal confiscó los activos de ICOMI como garantía de pago. Hasta 2013 no se alcanzó un acuerdo definitivo para que la empresa limpiara los terrenos y obtuviera permiso para retomar la exploración de manganeso en un terreno cercano.

Empresas afectadas: ICOMI y Bethlehem Steel Company

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/novoemfolha45/ult10096u429418.shtml> (en portugués)

<http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/viewFile/85/134> (en portugués)

<http://www.conflitoambiental.iciet.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=7> (en portugués)

Lugar: Criciúma, Treviso (Santa Catarina)

Suceso: Grupos ambientalistas y sociales protestaron contra la expansión de una mina de carbón. Denunciaron el grave impacto que estaba teniendo sobre la zona costera cercana a la mina, y ganaron batallas judiciales parciales al conseguir que se suspendieran las operaciones en cuatro ocasiones. El Ministerio de Medio Ambiente ya ha destinado fondos a la limpieza de la zona y espera poder obligar a la empresa a cubrir estos gastos.

Empresas afectadas: Termoelektrarna Sostanj

<http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2008/11/11/41868-mma-investe-r-13-milhao-na-bacia-carbonifera-de-santa-catarina.html> (en portugués)

<http://www.adjorisc.com.br/economia/china-podera-investir-na-producao-de-carvao-mineral-de-sc-1.1054186#.Ugaaj5Jwrjl> (en portugués)

<http://ejatlas.org/conflict/coal-mining-pollution-santa-catarina-brazil> (en inglés)

Lugar: Anitapolis (Santa Catarina)

The Munden Project

Suceso: Campesinos, organizaciones ambientales y empresas locales consiguieron interrumpir un proyecto de extracción de fosfato y ácido sulfúrico. Alegaban que el ecoturismo local se vería perjudicado por la mina. En 2010 IFC, la empresa mineral original, fue adquirida por Vale, que anunció que suspendería el proyecto hasta la realización de nuevos estudios.

Empresas afectadas: IFC y Vale

https://docs.google.com/file/d/174C_XNehwqkCh09kgAC4IpfBy2h_Jmx8WEjmK327_L9gNgcGMYk7sY4iZLuu/edit?hl=pt_BR (en portugués)

<http://www.blogpenadigital.com/2010/08/movimentos-sociais-realizam-manifesto.html> (en portugués)

<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,mina-vira-alvo-de-protestos-em-sc,438002> (en portugués)

Lugar: Corumba y Ladario (Mato Grosso del Sur)

Suceso: Las comunidades indígenas residentes en el pantanal protestaron contra la expansión de una mina de mineral de hierro que podía perjudicar a su territorio. Se impusieron varias multas a las empresas implicadas en la deforestación para la exploración de carbón vegetal. Las empresas contaban con todas las licencias para sus operaciones, pero se vieron obligadas a disminuir su producción para cumplir las exigencias locales, debido a múltiples acusaciones de actividades ilegales. MMX interrumpió sus operaciones durante 6 meses en 2013, pero el resto de las empresas siguen operativas.

Empresas afectadas: Corumba Mineração Ltda (COMIN), MMX, Rio Tinto, Vale

http://www.lima.coppe.ufjf.br/files/aaepantanal/Relatorio_Executivo.pdf (en portugués)

<http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/mmx-suspende-producao-de-minerio-de-ferro-em-corumba-2> (en portugués)

http://www.justicaambiental.org.br/noar/anexos/acervo/17_071129_ibama_fecha_carvoaria_terra_indigena_pantanal.pdf (en portugués)

Lugar: Paulinia (São Paulo)

Suceso: Los residentes de la zona próxima a una fábrica de pesticidas propiedad de Shell (y posteriormente de BASF) sufrieron la contaminación de su tierra y sus aguas subterráneas. Se determinó que había una relación entre la contaminación y un gran número de casos de cáncer. Muchos antiguos trabajadores y sus familias recibieron indemnizaciones considerables, que alcanzaron un total de 316 millones de dólares estadounidenses (US\$). Aún no se ha tomado una

The Munden Project

decisión judicial que obligue a la empresa a limitar sus operaciones o limpiar la tierra y las aguas subterráneas.

Empresas afectadas: Shell y BASF

<http://business-humanrights.org/en/shellbasf-lawsuit-re-brazil#c18656> (en inglés)

<http://www.bloomberg.com/news/2012-03-01/basf-shell-in-talks-to-settle-653-million-brazil-contamination-penalty.html> (en inglés)

<http://www.portaldepaulinia.com.br/home/noticias-de-paulinia/cidade/14725-shell-e-basf-terao-que-fazer-pagamento-antecipado-referente-ao-tratamento-medico.html> (en portugués)

Lugar: Caeté, Santa Bárbara, Raposos y Rio Acima (Minas Gerais)

Suceso: Se esperaba que el proyecto de una mina de hierro recibiera una superficie que pertenecía a un parque nacional. Las poblaciones locales lo rechazaron, poniendo en tela de juicio la veracidad de los planes de traer a la región beneficios y puestos de trabajo. El caso recibió un fuerte apoyo político y el proyecto se suspendió.

Empresas afectadas: Vale

<http://api.ning.com/files/VZ8NRafuL7YDB6vQvZVVrx3v7niQ8EGmqWZ2VtWhpFpRH8vXtomCdTiepnNbEnUyNzWw00kwMPLFsEmIgw55NXHnyyNRNI7/Gandarela.pdf> (en inglés)

<http://forestrivers.wordpress.com/2012/11/20/actions-create-the-parque-nacional-da-serra-do-gandarela/> (en inglés)

Lugar: Araripina (Pernambuco)

Suceso: Suzano, una importante empresa de pulpa y papel, amplió su plantación de eucalipto transgénico hasta Araripina, una zona principalmente compuesta por *caatinga* (una ecorregión de flora arbustiva desértica y bosques espinosos). Tuvo que reasentarse a las contrapartes locales debido a que el extenso monocultivo afectó a su producción local. La expansión del proyecto se interrumpió y las autoridades estatales asignaron recursos económicos a la reparación de algunos de los daños causados.

Empresas afectadas: Suzano

<http://www.codevasf.gov.br/noticias/2006/desenvolvimento-florestal-para-araripe/> (en portugués)

<http://racismoambiental.net.br/2013/06/suzano-vai-investir-em-plantacao-de-eucalipto-para-geracao-de-energia-em-pernambuco-mais-uma-ameaca-para-agricultores-e-biodiversidade/#more-105482> (en portugués)

<http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/plantio-de-eucalipto-para-conservao-da-caatinga-25281> (en portugués)

Lugar: Juazeiro, Orocá, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista (Pernambuco)

Suceso: Las comunidades locales protestaron contra la construcción de varias presas en el río São Francisco que habrían alterado gravemente su forma de vida y habrían obligado a muchas de ellas a reasentarse en otra zona. Se convocaron muchas manifestaciones e incluso hubo un intento de ocupar las oficinas de la empresa eléctrica responsable. Las autoridades pertinentes ya han retrasado el proyecto al menos dos años, ya que exigen que la EIA contenga unas condiciones más detalladas.

Empresas afectadas: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF)

<http://www.mabnacional.org.br/noticia/comunidades-dizem-n-ao-projeto-da-barragem-riacho-seco> (en portugués)

<http://pedesenvolvimento.com/2010/03/29/pernambuco-recebe-usina-hidreletrica/> (en portugués)

<http://www.conflitoambiental.iciet.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=312> (en portugués)

Lugar: Juruti (Pará)

Suceso: La extracción de bauxita en Juruti ha provocado en la región una degradación ambiental, particularmente de la calidad del agua, lo que ha despertado movimientos sociales en contra de la empresa minera Omnia, propietaria también de una ferroviaria. En 2007 se celebraron audiencias públicas para solicitar la suspensión de las licencias y evitar así que se continuara con la extracción. En 2009, 1 500 personas bloquearon a modo de protesta la línea del ferrocarril, la autopista y el puerto y ocuparon la entrada a la base de operaciones de la empresa. Sin embargo, se concedió a la empresa una licencia de operaciones, así que el problema no se ha resuelto.

Empresas afectadas: Omnia Minérios Ltda (Alcoa Alumínio S/A)

<http://ejatlas.org/conflict/bauxite-mining-in-juruti-para-brazil> (en inglés)

<http://geopuc.geo.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=23&sid=13> (en portugués)

Lugar: Itaituba, Trairão, Jacareacanga, Santarém y Aveiro (Pará)

Suceso: La tribu munduruku protestó contra la construcción de cinco centrales hidroeléctricas y consiguió interrumpir las operaciones.

<http://www.conflitoambiental.iciet.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=432> (en portugués)
<http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-antiores/30062-nasce-em-itaituba-a-%60%60alianca-tapajos-vivo%60%60> (en portugués)
<http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-antiores/22028-povos-da-bacia-do-tapajos-rejeitam-complexo-hidreletrico-nos-rios-da-regiao> (en portugués)

Lugar: Oriximiná (Pará)

Suceso: MRN es la mayor empresa minera del municipio de Oriximiná, donde tiene al menos 10 concesiones de minería (principalmente de bauxita), que abarcan más de 100 000 hectáreas. En diversas ocasiones, los fiscales han tenido éxito al querellarse contra la empresa, como cuando consiguieron suspender la autorización de deforestación de Floresta Nacional Saraca-Taquera. La empresa también ha incurrido en una multa de 325 000 reales (R\$) por incumplimiento de la legislación laboral.

Empresas afectadas: Mineração Rio do Norte (MRN), BHP Billiton, Rio Tinto Alcan

<http://ejatlas.org/conflict/bauxite-mining-and-deforestation-in-oriximina-para-brazil> (en inglés)

Lugar: Gleba Nova Olinda, Pará

Suceso: En 2009, 40 comunidades tradicionales bloquearon el transporte de madera por el río Arapiuns durante un mes y tomaron dos barcazas que transportaban 2 000 metros cúbicos de madera, que más tarde prendieron.

Empresas afectadas: Cooperativa dos produtores do Oeste do Para, Rondobel Industria e Comercio de Madeira

<http://ejatlas.org/conflict/deforestation-and-land-conflict-in-gleba-nova-olinda-para-brazil> (en inglés)
<http://www.conflitoambiental.iciet.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=349> (en portugués)

Lugar: Porto de Moz, Pará

Suceso: En los últimos años, la explotación maderera de Porto de Moz ha provocado violentos conflictos relacionados con la tierra, y el Madenorte es el grupo empresarial más importante de la zona. En 2002 las comunidades locales sugirieron la creación de la Reserva Verde para Sempre, de 1,3 millones de hectáreas de extensión, lo que impediría que el Grupo Madenorte utilizara esa tierra para la explotación de madera. En 2004 el Gobierno de Lula aprobó la Reserva.

The Munden Project

Empresas afectadas: Grupo Madenorte (incluye diferentes empresas, como Madenorte S/A Laminados Compensados, Norte Madeiras Importação, Exportação Ltda. y Marajo Island Business Ltda.)

<http://ejatlas.org/conflict/timber-exploitation-porto-de-moz-brazil> (en inglés)

<http://www.cdca.it/spip.php?article1639&lang=it> (en inglés)

Lugar: Serra da Onça in Ourilandia do Norte, Pará

Suceso: La extracción de níquel de Vale en Serra da Onca opera bajo una licencia concedida por el Departamento Nacional de Produção Mineral. Se exigió a Vale una indemnización por la apropiación de una zona que pertenecía a poblaciones rurales, pero los habitantes han denunciado a la empresa por coaccionarles a aceptar la escasa cantidad que les ofrecían. Como respuesta al impacto de las minas y la falta de una indemnización justa, han bloqueado la carretera de acceso a la mina en diversas ocasiones. Como la mina también afecta a las cuencas de los indios kayapo y xikirn, en 2012 el Ministerio Público Federal interpuso también una acción civil pública para suspender las actividades de la mina.

Empresas afectadas: La filial de Canico do Brasil Mineração Ltda, Mineradora Onça Puma (MOP). En agosto de 2008, la Companhia Vale do Rio Doce (CVRD/Vale) adquirió MOP.

<http://ejatlas.org/conflict/onca-puma-nickel-mining-project-in-ourilandia-do-norte-para-brazil> (en inglés)

<http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=74> (en portugués)

Lugar: Moju, Pará

Suceso: CADAM extrae caolín (arcilla de China) y lo transporta por un conducto en el municipio de Moju, donde hay 674 familias de quilombolas cuyos cultivos se han visto afectados por las operaciones. Como resultado de ello, en 2006 bloquearon 3 carreteras de acceso a la mina para protestar por el hecho de que la empresa no había cumplido los mandatos del municipio, que incluían la construcción de una casa de la comunidad para la educación agrícola y un puesto de salud, así como la reconstrucción de 33 millas de carreteras en tierras de quilombos. Asimismo, se han destruido torres de líneas de transmisión eléctrica. El Ministerio Público Estadual aprobó también el derecho de las comunidades de que se realice un estudio del impacto ambiental. En 2008 Vale acordó cubrir los gastos del estudio e indemnizar a las familias afectadas.

Empresas afectadas: CADAM, una filial de Vale (la antigua Companhia Vale do Rio Doce). Vendida a KaMin en 2012.

<http://ejatlas.org/conflict/kaolin-pipeline-on-quilombo-land-in-moju-para-brazil> (en inglés)

Lugar: Caucaia (Ceará)

Suceso: Debido a la falta de demarcaciones oficiales de las tierras tradicionales, los indios tapeba se han visto afectados por las múltiples actividades económicas que se realizan en su territorio. En nombre del pueblo tapeba, el Ministério Público Federal obtuvo un fallo judicial por el que se suspendía la extracción de arcilla en sus tierras indígenas.

<http://ejatlas.org/conflict/tapeba-indians-threatened-by-companies-and-public-policies-in-caucaia-ceara-brazil> (en inglés)

<http://www.conflitoambiental.iciet.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=42> (en portugués)

Lugar: Santa Rita (Paraíba)

Suceso: En 2002, PRJC comenzó con la cría industrial de gambas en el territorio tradicional de la comunidad de Forte Velho. Instalaron tanques de tal manera que se bloqueaba el paso de los pescadores de la comunidad al delta del río Sanhaua. Además, las prácticas de la cría han provocado la salinización de pozos de agua y, en 2007, la empresa rompió un dique, lo cual contaminó mangles y afectó a la flora y fauna local. Por este suceso, IBAMA suspendió las actividades de la empresa, el Ministerio Público Federal ha interpuesto varias demandas para exigir el acceso de la comunidad, y la comunidad está pendiente de recibir el resultado de una demanda para que se suspendan por completo las operaciones.

Empresas afectadas: PRJC

<http://ejatlas.org/conflict/shrimp-farms-v-fishermen-in-santa-rita-brazil> (en inglés)

<http://www.conflitoambiental.iciet.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=125> (en portugués)

<http://www.ecodebate.com.br/2009/04/22/esgoto-e-criacao-de-camarao-destroem-manguezais-da-paraiba/> (en portugués)

Lugar: Sapeacu (Bahía)

Suceso: En el pueblo de Sapeacu se aprobó el proyecto de la empresa Multiner de tres centrales energéticas alimentadas con petróleo pesado. Como respuesta a ello, la población local se movilizó para evitar que se otorgaran las licencias correspondientes, celebró manifestaciones y presionó a los fiscales. Como resultado de todo esto, el Conselho Estadual de Meio Ambiente revocó las licencias ambientales y la empresa suspendió los proyectos.

Empresas afectadas: Multiner

<http://ejatlas.org/conflict/thermal-power-plants-in-sapeacu-brazil> (en inglés)

<http://www.gana.org.br/site/?p=113> (en portugués)

Lugar: Coronel Murta (Minas Gerais)

Suceso: Las comunidades rurales se organizaron para hacer frente a los planes de construcción de una central hidroeléctrica (la presa de Murta) en el río Jequitinhonha, porque la inundación que provocaría la presa afectaría a 900 familias y a 22 comunidades que vivían en sus tierras tradicionales. Tras 14 años de audiencias públicas, estudios del impacto ambiental y modificaciones de los planes de la presa, las comunidades rurales consiguieron que en 2012 se suspendiera el proyecto de la central eléctrica.

Empresas afectadas: El consorcio llamado Murta Energética S.A. (que antes se llamaba CMPB-Energético, compuesto por Eptisa, Logos y Technical Industrial Company S.A. o EIT)

<http://ejatlas.org/conflict/murta-dam-mg-brazil> (en inglés)

<http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=220> (en portugués)

Lugar: Caravelas e Nova Viosa (Bahía)

Suceso: En 2004 Coopex solicitó una licencia para una explotación de cría de gambas de 1 500 hectáreas en Caravelas, que se superponía a la misma superficie que las comunidades locales habían propuesto para la reserva de extracción Cassurubá. Esta reserva tenía como objetivo garantizar el medio de vida local basado en la pesca y recolección de marisco a pequeña escala. Las comunidades locales y organizaciones ambientales se movilizaron para ejercer presión contra la propuesta de Coopex y en 2009 el Gobierno creó la reserva de extracción Cassurubá, cancelando así el plan de Coopex.

Empresas afectadas: Coopex, filial del Grupo Lusomar (asociada con 26 inversores brasileños)

<http://ejatlas.org/conflict/cassuruba-reserve-in-caravelas-bahia-brazil> (en inglés)

<http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=32502> (en portugués)

Lugar: Vitória (Espírito Santo)

The Munden Project

Suceso: Aracruz Celulose S.A. tomó 11 000 hectáreas de territorio indígena para producir pulpa blanqueada de eucalipto y desplazó a 8 500 familias. Aunque la empresa sigue en activo, el territorio ha recibido el reconocimiento de territorio indígena y se han devuelto algunas de las tierras tomadas.

Empresas afectadas: Aracruz Celulose S.A.

<http://ejatlas.org/conflict/eucalyptus-plantations-aracruz-celulose-brazil> (en inglés)

Lugar: Estreito, Darcinópolis, Carolina y Babaçulândia (Maranhão)

Suceso: Tribus indígenas locales protestaron contra la construcción de una central hidroeléctrica que iba a alterar el curso del río Tocantins, lo cual causaría diferentes ciclos de pesca y afectaría a la fuente principal de ingresos de las tribus. Las primeras audiencias se celebraron en 2002, pero los conflictos no empezaron hasta 2006, cuando quedó claro el daño que iban a causar las presas. En 2007 un juez regional interrumpió las operaciones, pero estas se reanudaron tres meses después. En 2008 unas 400 personas ocuparon la carretera de acceso a la obra. Aún se está negociando un acuerdo.

Empresas afectadas: Suez Energy South America, Vale, Alcoa y Camargo Correa Energia

<http://www.conflitoambiental.iciet.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=51> (en portugués)

<http://www.ecodebate.com.br/2008/04/10/hidreletrica-de-estreito-a-mesa-com-os-atingidos-e-com-os-indigenas/> (en portugués)

<http://reporterbrasil.org.br/2008/08/indigenas-temem-impactos-e-demonstram-desconfianca/> (en portugués)

Lugar: Alto Alegre do Maranhão (Maranhão)

Suceso: La comunidad rural Campo da Bandeira se vio expulsada de su territorio por la expansión de una granja de ganado. La comunidad había ocupado el territorio durante unos 40 años, pero no poseía la titularidad legal. La tierra estaba bajo disputa, pero no se tomó una decisión definitiva. Se obligó a la comunidad a que dejara la tierra, pero en cuatro ocasiones volvieron a ocuparla y alterar las operaciones ganaderas. Las amenazas de los contratistas hicieron que la comunidad rural desistiera de realizar nuevas incursiones. Las autoridades implicadas están a la espera de una decisión judicial.

Empresas afectadas: Grupo Fazenda Cachucha Agropastoril

<http://www.conflitoambiental.iciet.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=476> (en portugués)

<http://blog-do-pedrosa.blogspot.com.br/2013/09/campo-do-bandeira-resiste.html> (en portugués)

Lugar: Urbano Santos, Anapurus y Belágua (Maranhão)

Suceso: Los residentes locales denunciaron a Suzano Papel e Celulose y a un empresario local, Eduardo Loeff, por deforestar amplias superficies y afectar a su medio de vida. Se estableció que Urbano Santos era una de las zonas con mayor índice de deforestación del país, lo que atrajo el interés de los grupos ambientalistas. Se llevaron a cabo varias manifestaciones, pero las batallas realmente productivas se libraron en los tribunales. Tras 3 años de litigios, los habitantes locales ganaron por fin un caso por el que se obligaba a Suzano a detener alguna de sus operaciones. En 2012 se concedieron a las comunidades locales 1 635 hectáreas de la explotación improductiva de Loeff. El empresario intentó revertir la decisión judicial en dos ocasiones sin éxito.

Empresas afectadas: Suzano

<http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=439> (en portugués)
<http://racismoambiental.net.br/2012/06/maranhao-tem-o-maior-registro-de-conflitos-por-terra-em-todo-o-pais/2/> (en portugués)
<http://racismoambiental.net.br/2010/11/denuncia-ong-apresenta-relatorio-de-crimes-ambientais-da-suzano-em-urbano-santosma/> (en portugués)

Lugar: Itapecuru Mirim (Maranhão)

Suceso: Los quilombolas protestaron contra la construcción de una vía férrea que iba a atravesar su territorio. En 2011 el Ministerio Público se pronunció a favor de las comunidades en diversas ocasiones, con lo cual se retrasó la construcción de la vía. En 2013 las negociaciones avanzaron un poco, ya que Vale cedió ante muchas solicitudes, pero aún no se ha tomado una decisión oficial sobre la vía férrea.

Empresas afectadas: Vale

<http://portogente.com.br/noticias-do-dia/duplicacao-de-carajas-tem-efeitos-em-cadeia-no-para-e-maranhao-48415> (en portugués)
<http://180graus.com/maranhao-180/seir-realiza-acompanhamento-da-comunidade-quilombola-santa-rosa-dos-pretos-em-itapecurumirim> (en portugués)
<http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=448> (en portugués)

Lugar: São Luís (Maranhão)

The Munden Project

Suceso: Pescadores y quilombolas, por temor a un reasentamiento, denunciaron la creación de un distrito industrial. Las comunidades querían que su territorio se convirtiera en una reserva de extracción (parecido a un parque nacional), pero este proceso lleva muchos años. La creación de un área protegida consiguió un apoyo político considerable y se aprobó en 2011, seis años después de la solicitud original. En 2013 una orden judicial prohibió el reasentamiento de cualquier residente de la reserva, lo que obligó a rediseñar el complejo industrial.

Empresas afectadas: Baosteel, Posco, Thyssen-Krupp

<http://www.prma.mpf.gov.br/noticia-4739> (en portugués)

http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppIII/html/Trabalhos/EixoTematicoI/Horacio_Antunes_Rafael.pdf (en portugués)

Lugar: Aracruz (Espírito Santo)

Suceso: La construcción de un gran astillero invadiría un área de protección permanente, lo cual denunciaron las comunidades indígenas afectadas y organizaciones ambientales. Los manifestantes presentaron acusaciones de corrupción por la rapidez con la que se aprobó una legislación municipal nueva que favorecía a la construcción. En 2010, dos años después de la propuesta inicial, se interrumpieron los estudios a causa de negociaciones indebidas con las contrapartes locales e irregularidades en la concesión de permisos ambientales.

En 2012, se firmaron contratos por un valor total de más de 4 000 millones de dólares estadounidenses (US\$) para la construcción del astillero, a pesar de los conflictos existentes. El Grupo EBX propuso cambiar la ubicación del astillero al estado de Río de Janeiro, lo cual provocó un problema diplomático, ya que el Gobierno de Singapur exigió una explicación sobre la validez de los contratos existentes. Tuvieron que negociarse varios acuerdos, que incluyeron algunos proyectos de infraestructuras y la contratación de mano de obra local, para convencer a los residentes locales de que aceptaran el proyecto.

Empresas afectadas: Fibria Aracruz Celulose, Jurong Shipyard

<http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2013/03/21/embaixador-do-brasil-em-cingapura-tera-de-explicar-caso-do-estaleiro-jurong> (en portugués)

<http://seculodiario.com.br/17621/10/dragagem-da-jurong-prejudica-pesca-artesanal-em-barra-do-riacho-1> (en portugués)

<http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=418> (en portugués)

COLOMBIA

Lugar: Tairara (Vaupes)

Suceso: Comunidades indígenas alegaban que se había otorgado una concesión de extracción de oro sin su consentimiento previo. Las actividades de la empresa se suspendieron en 2008 pero se reanudaron unos meses más tarde.

Empresas afectadas: Consigo – Frontier

http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/06/Taraira_El-ojo-del-hurac%C3%A1n-minero_Diana-Mendoza_Junio-2013.pdf

<http://ejatlas.org/conflict/taraira-vaupes-colombia>

Lugar: Varios lugares (Cauca y Putumayo)

Suceso: Los comunidades indígenas no venden a AngloGold y B2Gold sus títulos de tenencia porque no reciben ayuda de las autoridades federales para enfrentarse a su reasentamiento.

Empresas afectadas: AngloGold Ashanti y B2Gold

<http://www.procesocampesinolavega.org/2011/08/campesinos-e-indigenas-de-la-vega-cauca-encararon-a-mineros-ilegales/>

<http://lasillavacia.com/historia/las-minas-del-cauca-34959>

Lugar: El Quimbo (Huila)

Suceso: Las comunidades afectadas por la construcción de una central hidroeléctrica bloquearon el acceso por carretera a la obra e interpusieron diversas demandas para detener el proyecto. El éxito de esas causas judiciales fue parcial, pero consiguió interrumpir las operaciones durante nueve meses.

Empresas afectadas: EMGESA y su mayor accionista ENDESA

<http://ejatlas.org/conflict/el-quimbo-hydroelectric-project-colombia>

http://www.tusemanario.com/noticia/continuan-exigencias-por-la-liberacion-de-la-madre-tierra_5114

<http://www.elsespectador.com/noticias/nacional/protesta-construccion-de-hidroelectrica-el-huila-deja-2-articulo-367312>

Lugar: Suárez (Cauca)

Suceso: Las comunidades locales se movilizaron en diversas protestas y contactaron con las autoridades pertinentes hasta conseguir la suspensión de todas las licencias de extracción de oro de la zona. La manzana de la discordia fue que el consentimiento previo no se había obtenido adecuadamente.

Empresas afectadas: AngloGold Ashanti

<http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/oro-violencia-muerte-suarez-cauca/115274-3>

<http://notiagen.wordpress.com/2012/04/02/la-selvaje-selvajina-el-despojo-y-el-oro-en-suarez/>

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=84

Lugar: Buenaventura (Valle del Cauca)

Suceso: Grupos ambientalistas y comunidades locales consiguieron evitar la construcción de un puerto al colaborar para garantizar la creación de un parque nacional en la zona. Muchos organismos industriales, grupos de presión y representantes del Gobierno se vieron implicados en ambos bandos, los cuales encargaron a distintas universidades que llevaran a cabo numerosos estudios.

Empresas afectadas: constructoras locales

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7702527>

<http://www.semana.com/enfoque/articulo/tribuga-vez-malaga/118877-3>

<http://www.wwf.org.co/?194448/Baha-Mlaga-es-al-fin-Parque-Nacional>

Lugar: Murindó y Carmen Darién (Antioquía y Chocó)

Suceso: Comunidades indígenas interpusieron una demanda contra una operación de extracción de cobre y oro que les habría obligado a abandonar su territorio. En 2005 se concedió a Muriel Mining Corporation (MMC) nueve concesiones de explotación y exploración en un área reconocida como territorio indígena. La presencia del proyecto en el área provocó una militarización de la zona y supuestos abusos de los derechos humanos.

En 2009 el Tribunal Constitucional dictaminó que MMC no había obtenido el consentimiento libre, previo e informado; que se suspenderían todas las licencias; que el Ministerio de Medio Ambiente debía llevar a cabo un estudio del impacto ambiental; y que el Ministerio de Defensa debía revisar su presencia y actividades en la zona. En 2012 los tribunales rechazaron una apelación de MMC y el Gobierno colombiano.

The Munden Project

Empresas afectadas: Muriel Mining Corporation, Rio Tinto

<http://ejatlas.org/conflict/proyecto-mand-norte-murind-colombia>
<http://justiciaypazcolombia.com/Indigenous-and-Afro-Colombians-of>
<http://www.elespectador.com/choco/columna111273-socia-mande-norte>
<http://prensarural.org/spip/spip.php?article1854>

Lugar: Cerrito y Chitaga (Santander)

Suceso: La exploración de carbón en la región alteraba gravemente la vida de los trabajadores rurales, quienes denunciaron la situación y consiguieron un amplio apoyo político. Las licencias de exploración de carbón se revocaron en 2008, pero volvieron a expedirse al año siguiente.

Empresas afectadas: CARBORIENTE y MINALMO

<http://prensarural.org/spip/spip.php?article3022>
<http://paramoalmorzadero.es.tl/PARAMO-EL-ALMORZADERO.htm>
<http://ejatlas.org/conflict/paramo-el-almorzadero-colombia>

Lugar: El Cerrejón (La Guajira)

Suceso: Una antigua mina de carbón de la década de 1970 se amplió en 2001, lo que obligó a las comunidades locales a abandonar sus hogares. Además, se observaron daños ambientales irreversibles en los ríos locales y la contaminación del aire era evidente. El Ministerio de Justicia exigió el reasentamiento de la población afectada y que se garantizaran sus derechos fundamentales.

Empresas afectadas: BHP Billiton, Anglo American, Glencore International AG y Carbones del Cerrejon Ltd (la antigua Intercor Exxon Mobil)

<http://ejatlas.org/conflict/el-cerrejn-mine-colombia>
<http://www.cmi.com.co/?n=79769>
http://www.cetim.ch/es/interventions_details_print.php?iid=288

PERÚ

Lugar: Conga (Cajamarca)

The Munden Project

Suceso: Un proyecto de extracción de oro incluía entre sus planes secar cuatro lagos para crear las condiciones óptimas para el negocio. El proyecto está situado al este de una cuenca hidrográfica y ya se habían notado unos efectos muy graves causados por la contaminación.

Unas multitudinarias manifestaciones en contra de la mina acabaron en incidentes violentos, que se saldaron con un total de al menos 30 muertos. El Gobierno federal tuvo que instaurar un estado de emergencia dos veces debido a conflictos con la población. Las protestas también conllevaron la dimisión del Primer Ministro a finales de 2011.

La operación se detuvo después de que tomara el poder el nuevo Primer Ministro a principios de 2012, cuando solicitó ayuda internacional para evaluar los daños ambientales causados por la empresa.

Empresas afectadas: Newmont Mining Company y Compañía Minera Buenaventura

<http://www.peruviantimes.com/tag/minas-conga/> (en inglés)

<http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2012-07-05/choques-em-protesto-contraprojeto-de-mineracao-no-peru-deixam-mais-mortos.html> (en portugués)

<http://www.ihu.unisinos.br/noticias/511206-novos-protestos-contruma-mina-no-peru-provocam-tres-mortos> (en portugués)

Lugar: Quellaveco (Moquegua)

Suceso: 28 comunidades exigieron que se suspendiera la EIA de una mina de cobre. Alegaban que no se había contactado con algunas de las comunidades para tratar el proyecto, que les afectaría gravemente. Anglo American intentó negociar pero no tuvo éxito. Las operaciones se interrumpieron durante 18 meses, con el fin de garantizar unos acuerdos beneficiosos con las contrapartes locales.

Empresas afectadas: Anglo American

<http://www.larepublica.pe/29-06-2012/moquegua-pide-anglo-american-s850-millones-por-proyecto-quellaveco>

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=106

Lugar: Cocachacra (Arequipa)

Suceso: Las operaciones de una mina de cobre en un área muy seca de Perú ponían en peligro el acceso de la población local al agua. En 2010 el diálogo era tenso, lo que provocó un retraso de un año del proyecto. En 2011 el conflicto se intensificó y tres personas murieron en las

confrontaciones. Para restaurar el orden se desplegaron fuerzas militares. Un mes más tarde, el Ministerio de Energía y Minas declaró inadmisibles la EIA y exigió a la empresa que retirara su maquinaria de las instalaciones. Se está elaborando una nueva EIA, pero esta vez con la observación de 3 000 miembros de las comunidades locales. Se espera que las actividades se retomen en 2015.

Empresas afectadas: Southern Peru Copper Corporation y Gropo Mexico

<http://ejatlas.org/conflict/tia-maria-peru> (en inglés)

<http://elcomercio.pe/peru/lima/gobierno-cancelo-definitivamente-proyecto-tia-maria-noticia-739845>

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=157

Lugar: Llusco (Cuzco)

Suceso: La expansión de las concesiones de oro, cobre y plata preocupaba a las comunidades locales, que temían por cómo afectaría a sus actividades agrícolas y su acceso al agua. La protesta adoptó la forma de una huelga general en la ciudad, que duró nueve días. Las autoridades locales amenazaron con tomar las instalaciones mineras si las empresas no se retiraban. Hubo una gran batalla judicial, que concluyó con una exigencia por parte del Gobierno federal de un nuevo EIA para dos minas y la suspensión permanente de la licencia para otra.

Empresas afectadas: Hochschild Mining, Compañía Minera Ares SAC y ANABI SAC

<http://www.larepublica.pe/07-02-2012/incendian-campamento-minero-de-anabi-en-cusco>

<http://ejatlas.org/conflict/chumbivilcas-peru>

<http://www.inforegion.pe/portada/41414/campamento-de-minera-ares-en-chumbivilcas-continua-tomado-por-frente-de-defensa-y-mineros-ilegales/>

Lugar: Río Ene-Tambo (Junin)

Suceso: La construcción de dos presas para obtener energía hidroeléctrica se detuvo gracias a la campaña del pueblo ashaninka. Su líder, Ruth Mestoquiari, recibió el galardón ambiental Goldman Environmental Prize en 2014 por su considerable compromiso con la causa. Las presas habrían provocado el desplazamiento de 8 000-10 000 personas. Las protestas duraron tres años, hasta que las autoridades federales tomaron medidas y exigieron la reubicación del proyecto.

Empresas afectadas: Odebrecht

The Munden Project

<http://www.reuters.com/article/2014/04/29/us-peru-environment-goldman-idUSKBN0DE1L620140429> (en inglés)

<http://www.peruthisweek.com/news-ashaninka-leader-ruth-buendia-wins-goldman-environmental-prize-for-her-fight-to-halt-construction-of-the-pakitzapango-dam-102839> (en inglés)

<http://intercontinentalcry.org/flooding-our-future-megadams-of-the-peruvian-amazon/> (en inglés)

Lugar: San Mateo de Huanchor (Lima)

Suceso: En 2002 un gran número de diagnósticos médicos encontró pruebas sólidas que demostraban una contaminación de la tierra y el agua causada por el arsénico de los desechos de la minería de la región. Se interpusieron numerosas demandas, que concluyeron con decisiones favorables a la población afectada. La empresa pagó unas indemnizaciones considerables, pero aún no ha limpiado el terreno.

Empresas afectadas: Minera Lisandro Proaño

<http://elecochasqui.wordpress.com/actualidad/2010-2/enero/tension-en-chicla-por-relaves-toxicos-de-tamboraque/>

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=28

<http://peru21.pe/noticia/239067/rio-rimac-amenazado-relaves-cerro-tamboraque>

Lugar: San Marcos (Ancash)

Suceso: Se trata de una de las minas más grandes de Perú. Cuando las empresas implicadas anunciaron sus planes de expansión en 2006, comenzaron los conflictos con las poblaciones locales, que llevaron a que la oficina del defensor del pueblo interviniera para organizar el diálogo.

Empresas afectadas: Compañía Minera Antamina S.A., Xstrata, BHP Billiton

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/informe-especial/antamina-conflicto-persistente_46912.html

<http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=349902&CategoryId=14095> (en inglés)

<http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/teck-to-expand-antamina-mine/article1207367/> (en inglés)

Lugar: Santiago de Chuco (La Libertad)

Suceso: Una comunidad denunció la contaminación del agua de su cuenca por culpa del proyecto de extracción de oro de Barrick y consiguió demostrar que tal suceso había ocurrido. La empresa

The Munden Project

inviertió grandes cantidades de dinero en medidas paliativas pero no solucionó el problema. Las autoridades federales criticaron la EIA, que tardó ocho meses más en completarse.

Empresas afectadas: Barrick

<http://www.bothends.info/mfi/dos5-factsheetaltochicamacas.pdf>
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=25
<http://www.northernminer.com/news/barrick-advances-alto-chicama-project-in-peru/1000143395/?&er=NA> (en inglés)

Lugar: Jesús, Pedro Gálvez, Cachachi (Cajamarca)

Suceso: Las comunidades locales tomaron una mina tras esperar demasiado tiempo a que se cumplieran los acuerdos con el operario. La empresa prometió puestos de trabajo y la mejora de carreteras, pero estas promesas no se cumplieron plenamente, lo cual enfureció a los residentes locales. Tras la invasión de la mina, la empresa contrató como seguridad a paramilitares, que amenazaban a los dirigentes locales. Dos años más tarde, las autoridades interrumpieron el proyecto y exigieron nuevos acuerdos entre la empresa y las contrapartes relevantes. La comunidad se niega a continuar con las discusiones sobre el proyecto.

Empresas afectadas: Miski Mayo (Vale)

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=184

Lugar: Mina de Yanacocha (Cajamarca)

Suceso: Las comunidades de las cercanías de la mina de Yanacocha, que se oponían a la expansión de la mina hasta Cerro Quilish, acabaron participando en violentas confrontaciones con los operarios de la mina. En 2012 se desató un gran conflicto, que se saldó con un número elevado de muertos y heridos. Se trata de la segunda mina de oro más grande del mundo, que produce unos 3 millones de onzas de oro al año. Está muy cerca de Minas Conga, y ambas están operadas por la misma empresa, así que ambos conflictos están relacionados. Tras los graves sucesos de Minas Conga, Yanacocha también se expuso a la decisión federal de interrumpir las operaciones hasta que se restaurara el orden.

Empresas afectadas: Newmont Mining Corporation y Buenaventura

<http://ejatlas.org/conflict/yanacocha-mine-peru> (en inglés)
http://cdca.it/IMG/pdf/Violencia_en_Carachugo_II_-_03-08-06_1_.pdf
<http://cdca.it/spip.php?article1684&lang=it> (en inglés)

Lugar: Pulán (Cajamarca)

Suceso: Las operaciones de esta mina de oro y plata se interrumpieron en diversas ocasiones. La primera fue en 2004, cuando Buenaventura paró la exploración durante aproximadamente un año a causa de las protestas con las que se exigía una EIA mucho más exhaustiva.

En 2008 las empresas implicadas celebraron una audiencia pública, a la que se impidió la entrada a casi 3 000 trabajadores rurales. Tres meses más tarde, estos trabajadores participaron en varias protestas, bloqueando carreteras de acceso y exigiendo la suspensión del proyecto. El Gobierno local actuó dos años más tarde, exigiendo a la empresa varias medidas de conservación, como la protección de las cabeceras de cuenca.

En 2012, tras las decisiones de Minas Conga, hubo una fuerte presión para detener las operaciones. En septiembre de 2013, hubo una importante huelga en la región, en la que se protestaba por la falta de medidas significativas sobre las cabeceras de cuenca.

Empresas afectadas: Buenaventura, La Zanja y Newmont

<http://grufidesinfo.blogspot.com/2011/05/pobladores-de-pulan-y-catache-piden.html>
<http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/ronderos-le-dicen-a-mineras-que-no-canten-victoria/>
<http://gestion.pe/empresas/zanja-expandira-su-produccion-oro-2071717>

Lugar: Reque (Lambayeque)

Suceso: Grupos locales organizados protestaron en contra de la mina de cobre, y denunciaron el riesgo para su bienestar y su producción agrícola de la contaminación por arsénico. Se llevaron a cabo negociaciones, pero no incluían a todas las partes relevantes. La empresa publicó varios informes que mostraban daños mínimos y respondieron a algunas solicitudes. Pero esto no fue suficiente para convencer a los residentes locales, que insistieron con vehemencia en que debían suspenderse todas las actividades. En octubre de 2009, Rio Tinto anunció que cancelaba el proyecto.

Empresas afectadas: Rio Tinto

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=155
<http://elcomercio.pe/ediciononline/html/2008-10-20/minera-rio-tinto-suspendio-construccion-planta-chiclayo.html>
<http://www.scribd.com/doc/7398026/Suspender-Proyecto-La-Granja-en-Reque>

Lugar: Ferrenafe (Lambayeque)

Suceso: Se trata de una antigua mina que pasó de mano en mano hasta formar parte del proyecto de Candente en 2001. Su exploración comenzó en 2004 y se propuso una expansión seis años más tarde. En 2012 alrededor de 2 000 residentes locales se organizaron y protestaron en contra de la expansión de esta mina de cobre, oro y plata. Hubo una consulta a la población local y el 95 % de los comuneros rechazaron el proyecto minero.

La empresa prosiguió con sus operaciones, lo cual enfureció a las organizaciones locales. Las autoridades regionales exigieron nuevos acuerdos entre las partes implicadas para otorgar las concesiones.

Empresas afectadas: Canariaco Copper Peru (Candente)

<http://www.larepublica.pe/09-10-2012/lambayeque-consulta-comunal-en-kanaris-rechazo-en-un-95-proyecto-minero-canariaco>
<http://gestion.pe/noticia/700372/candente-copper-invertira-us-1565-millones-canariaco-norte>
<http://elcomercio.pe/peru/lima/ministerio-energia-minas-desconoce-consulta-popular-contra-canariaco-noticia-1481186>

Lugar: Tambogrande (Piura)

Suceso: La población local se organizó y celebró una votación sobre una propuesta de proyecto de extracción de zinc, cobre y oro. Participaron 27 015 votantes, que mostraron su rechazo ante la mina propuesta. Los votantes temían por el impacto que tendría la mina sobre su proyecto de irrigación financiado por el Banco Mundial.

Empresas afectadas: Manhattan Minerals

<http://www.muqui.org/index.php/observatorio-de-conflictos-usermenu-16/273-piura-caso-proyecto-tambogrande>
<http://www.scribd.com/doc/13721411/Caso-Tambogrande-Peru-CLACSO>
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08941920309166> (en inglés)

Lugar: Huancabamba, Ayabaca (Piura y Cajamarca)

Suceso: Los planes de expansión de una mina de cobre se encontraron con la oposición de las comunidades locales, que votaron en contra de la expansión y reunieron un importante apoyo

público de los políticos y organizaciones ambientales locales. La población local denunciaba que podría ponerse en peligro su acceso al agua, ya que la operación minera requeriría grandes cantidades de este recurso. El Ministerio de Energía y Minas rechazó la EIA, alegando irregularidades en los acuerdos con las contrapartes locales.

Empresas afectadas: Majaz S.A. Mine, Monterrico Metals, Zijin Consortium y Rio Blanco

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=5

Lugar: Cenepa (Condorcanqui)

Suceso: Este proyecto tuvo que hacer frente a numerosas interrupciones. La primera fue en su mismo comienzo, ya que en 2001 el proyecto original no obtuvo la concesión necesaria de las autoridades correspondientes por condiciones naturales incompatibles con la exploración. En 2004 la empresa consiguió obtener las licencias de exploración. En 2007 se concedieron a la empresa 700 km² de un parque nacional para la mina de oro y cobre. Esto provocó duras críticas de la población local, pero hasta 2011 no consiguieron interrumpir las operaciones con ayuda del Ministerio de Energía y Minas. Las concesiones volvieron a estudiarse en junio de 2012 y las operaciones se retomaron poco tiempo después.

Empresas afectadas: Minera Afrodita, Dorato Resources

<http://servindi.org/actualidad/92630>

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=173

<http://www.larepublica.pe/01-06-2012/amazonas-minera-afrodita-afectaria-15-mil-nativos-de-los-pueblos-awajun-y-wampis>

Lugar: San Martín (San Martín)

Suceso: En 2006 Ecoamérica solicitó la adquisición de 72 000 hectáreas para la explotación maderera, pero no recibió una respuesta de las autoridades competentes. La empresa demandó al organismo federal en 2010 por su «silencio administrativo». Las comunidades indígenas que vivían en el territorio solo se enteraron de las intenciones de la empresa surcoreana en 2010, y se opusieron al proyecto, ya que tendrían que reasentarse.

La empresa no tenía títulos de tenencia pero procedió a deforestar 400 hectáreas de manera ilegal. Las autoridades tomaron medidas para detener las operaciones.

Empresas afectadas: Ecoamérica (Corea del Sur)

<http://farmlandgrab.org/post/view/18688> (en inglés)
http://www.chs-peru.com/reporte15/upload/archivos/archivo2_595.pdf
<http://diarioahora.pe/portal/noticias-san-martin/24-yurimaguas/8982-tc-declaro-improcedente-demanda-de-ecoamerica>

Lugar: Toquepala (Tacna)

Suceso: La región está situada al norte del desierto de Atacama y sufre una grave escasez de agua. En 2007 el Gobierno regional declaró un estado de emergencia por las graves sequías. Una mina de cobre con derecho a usar grandes cantidades de agua se vio seriamente afectada y sus operaciones se interrumpieron. La empresa había solicitado con anterioridad unas concesiones nuevas que la población local rechazó más tarde, alegando riesgos relacionados con el mayor uso de agua para las actividades mineras.

Empresas afectadas: Southern Peru Copper Corporation

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=102
http://aguasderegiotacna.blogspot.com/2008_11_30_archive.html

Lugar: Quellaveco (Moquegua)

Suceso: En 2000 Anglo American obtuvo la licencia necesaria para comenzar los estudios de una posible desviación del curso de un río para extraer cobre en el río Asana. En 2008 se presentó la EIA, pero esta no convenció a las contrapartes locales, que sugirieron algunos cambios para garantizar su acceso a agua adecuada para el consumo humano. El Gobierno regional exigió modificaciones de la EIA propuesta antes de aprobarla. Esto prolongó los estudios durante unos 8 meses, hasta que se presentó una versión adecuada.

Empresas afectadas: Anglo American Quellaveco

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=106
<http://www.conflictosmineros.net/component/content/article/5969>

LIBERIA

Lugar: Grand Kru, Maryland (Sinoe)

Suceso: En 2010, Golden Agri Resources (GAR) se asoció con el Gobierno de Liberia para crear un concesión de 220 000 hectáreas para una plantación de aceite de palma y una zona portuaria,

The Munden Project

de las cuales 40 000 se concederían a plantaciones de pequeños propietarios. En 2012 una ONG interpuso una demanda, en nombre de las comunidades que viven en esa tierra, contra GAR por incumplimiento de las normas de la Mesa redonda sobre el aceite de palma sostenible. Las reclamaciones de las comunidades incluían la contaminación del agua, la destrucción de sepulturas ancestrales, el reasentamiento forzoso y la destrucción de pantanos. En 2013, tras una evaluación realizada por un auditor, se paró el proyecto hasta que se cumplieran ciertos parámetros.

Empresas afectadas: Golden Agri Resources, que formó la asociación con el Gobierno de Liberia a través de Golden Veroleum (filial de Verdant Fund LP)

<http://ejatlas.org/conflict/golden-agri-resources-veroleum-palm-oil-plantations-sinoe-liberia> (en inglés)

Lugar: Gran Bassa, River Cess (Sinoe)

Suceso: Hay antecedentes de conflictos entre los operarios de una plantación de aceite de palma de 169 000 hectáreas y los pequeños propietarios locales que ocupan la tierra. En 2013 una huelga y manifestación (que surgió porque 250 trabajadores decían no haber recibido su sueldo) se convirtieron en unos disturbios en los que se quemaron 700 árboles y se rompió maquinaria. En agosto del mismo año, las autoridades del Gobierno local instaron a los ciudadanos a obstaculizar la realización de las encuestas necesarias para la expansión de la plantación.

Cuando el proyecto se amplió en 2011, la profanación de sepulturas y el derribo de granjas provocaron que los residentes locales presentaran quejas. El Consejo Tradicional Nacional se ha puesto de parte de Equatorial Palm Oil y el derecho de la Presidenta de vender la tierra, mientras que las comunidades locales, especialmente los líderes jóvenes, mantienen que no se les consultó sobre la expansión y que se les ha enojado por la destrucción de su tierra.

Empresas afectadas: Equatorial Palm Oil, Equatorial Biofuels Limited, Liberian Palm Developments Limited y Biopalm Energy

<http://ejatlas.org/conflict/equatorial-palm-oil-project-stalls-in-bassa-liberia> (en inglés)

<http://allafrica.com/stories/201308140486.html> (en inglés)

<http://www.ipsnews.net/2013/05/the-bitter-taste-of-liberias-palm-oil-plantations/> (en inglés)

<http://allafrica.com/stories/201304020472.html> (en inglés)

Lugar: Yekepa (Nimba)

Suceso: Cuando volvió a abrir varias minas, renovó el puerto más cercano y se aseguró el acceso al corredor que unía estas zonas, ArcelorMittal se enfrentó a críticas por la forma en que había

The Munden Project

manejado los impactos sociales y ambientales, en particular porque había concedido una indemnización insuficiente por el reasentamiento involuntario de los campesinos. Friends of the Earth argumentó que el dinero destinado a financiar el desarrollo económico se estaba invirtiendo en proyectos que no beneficiaban a las comunidades afectadas.

Empresas afectadas: ArcelorMittal

<http://ejatlas.org/conflict/arcelormittals-iron-ore-mining-liberia> (en inglés)

http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_9731000/9731458.stm (en inglés)

Lugar: Garwula (Grand Cape Mount)

Suceso: La Mesa redonda sobre el aceite de palma sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés) confirmó una queja interpuesta contra Sime Darby por los vecinos afectados por la creación de una plantación de aceite de palma de 5 000 hectáreas. Las comunidades locales se quejaban por la falta de consulta, insuficiente o nula indemnización y pérdida de sustentos.

En respuesta a la queja, que se presentó en septiembre de 2011, Sime Darby suspendió las operaciones de una zona polémica y accedió a mantener negociaciones bilaterales. No obstante, el Gobierno exigió participar en las negociaciones y estas se interrumpieron. Para el año siguiente ya había continuado la expansión de la plantación en la propiedad de los residentes locales, aunque la indemnización seguía siendo insuficiente o nula y la consulta inexistente.

Gracias a la intervención del Forest Peoples Program y el Sustainable Development Institute, el departamento gubernamental responsable ha cambiado, y se han congelado las concesiones futuras hasta que se resuelvan los problemas.

Empresas afectadas: Sime Darby Plantation (Liberia) Inc (Grupo Sime Darby)

http://www.foeeurope.org/sites/default/files/news/foee_liberia_landgrab_eng.pdf (en inglés)

<http://ejatlas.org/conflict/sime-darby-plantations-liberia> (en inglés)

<http://www.forestpeoples.org/topics/agribusiness/news/2012/04/liberia-agri-business-expansion-threatens-forests-and-local-communi> (en inglés)

MOZAMBIQUE

Lugar: Matuba Farm, fondo de tierras de EmVest en Limpopo/Chokwe (provincia de Gaza)

Suceso: EmVest Asset Management tiene problemas con los habitantes locales de Matuba (Mozambique) debido a informes contradictorios sobre las reivindicaciones de tierras. EmVest

The Munden Project

describe un arriendo de 2 000 hectáreas por 50 años con el Gobierno de Mozambique para la producción de cultivos alimentarios. No obstante, los documentos legales del Gobierno solo muestran un uso provisional de 1 000 hectáreas de tierra durante 2 años. Los vecinos de Matuba declaran que el Gobierno les obligó a ceder 1 000 hectáreas de tierra, no las 2 000 que describe EmVest. Además, insisten en que necesitan las otras 1 000 hectáreas de tierras de cultivo para cultivar y vivir.

Empresas afectadas: Las inversiones actuales ascienden a aproximadamente 5 200 000 dólares estadounidenses. Se ha producido cierta organización local de los campesinos, organizaciones internacionales de defensa ambiental, y estudiantes universitarios, pero ha sido reducida. Hasta la fecha, no se ha resuelto el problema y EmVest ha solicitado un documento del Gobierno (DUAT) para obtener la aprobación de las 1 000 hectáreas adicionales.

<http://ejatlas.org/conflict/matuba-farm-emvests-land-fund-in-limpopo-chokwe-gaza-province-mozambique> (en inglés)

http://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/OI_Emvest_Brief.pdf (en inglés)

Lugar: Plantación de azúcar de ProCana (Limpopo)

Suceso: El conflicto se debe a las 30 000 hectáreas del distrito de Massingir (provincia de Gaza), que originalmente se concedieron al Ministerio de Turismo para la creación del Parque Nacional de Limpopo. Más tarde, se prometió a ProCana (con respaldo de la inversión de Central African Mining and Exploration Co.) la misma tierra, para que produjera etanol a partir de caña de azúcar, que se regaría con agua de la presa Massingir. Esto habría repercutido negativamente sobre los campesinos afectados que trabajan más allá de la plantación. A los campesinos ya se les iba a desplazar por culpa del Parque Nacional, pero tomaron partido por este en contra de ProCana. El Gobierno retiró el acuerdo alegando incumplimiento de ciertas cláusulas contractuales, porque CAMEC había desviado su inversión y ya no era para biocarburantes.

Empresas afectadas: ProCana, Central African Mining and Exploration Co.

<http://ejatlas.org/conflict/procana-sugar-plantation-limpopo-mozambique> (en inglés)

<http://www.tni.org/paper/politics-agrofuels-and-mega-land-and-water-deals> (en inglés)

Lugar: Gaseoducto de gas natural de Pande-Temane (Inhambane)

Suceso: Sasol solicitó a la CMNUCC el derecho a producir y vender créditos de carbono porque alegaba estar eligiendo entre la construcción de una nueva mina de carbón y la de un gaseoducto hasta los yacimientos de gas de Inhambane (Mozambique). Las organizaciones ambientales (en particular Earthlife Africa) intervinieron para puntualizar que Sasol llevaba desde 1998

The Munden Project

planteándose la construcción de este gaseoducto tan lucrativo. La CMNUCC rechazó el proyecto, pero no incluyó ningún tipo de declaración en contra de las empresas que manipulan el sistema de créditos de carbono, como esperaban las organizaciones ambientales.

Empresas afectadas: Sasol

<http://ejatlas.org/conflict/pande-temane-natural-gas-pipeline-mozambique-south-africa> (en inglés)
<http://www.tni.org/article/sasol-cdm-developed-world-pays-sasol-increase-its-carbon-emissions> (en inglés)

Lugar: Plantaciones forestales de Ntacia (Zambia)

Suceso: Ntacia Florestas de Zambia, bajo propiedad del Global Solidarity Forest Fund, actualmente es propietaria de 9 500 hectáreas de tierra en Zambia, pero ha solicitado 70 000 para plantaciones de árboles para la venta de madera. Se ha desatado un conflicto con las comunidades locales debido a la falta de una consulta adecuada, entre otros problemas ambientales.

Empresas afectadas: Ntacia Florestas, Global Solidarity Forest Fund

<http://ejatlas.org/conflict/ntacia-tree-plantations-in-zambia-mozambique> (en inglés)
<http://www.open.ac.uk/technology/mozambique/sites/www.open.ac.uk.technology.mozambique/files/pics/d131619.pdf> (pág. 47) (en inglés)

Lugar: Plantaciones forestales de monocultivo de Tectona (Zambia)

Suceso: Tectona Forest of Zambia es otra de las empresas que forma parte de la inversión de Global Solidarity Forest Fund. En este caso, está usando superficies de plantaciones de teca que antes hacían la función de explotaciones agrícolas comunitarias para 38 comunidades locales. Según la empresa, los conflictos surgieron durante el proceso de titulación debido a una «falta de consenso respecto a la demarcación del área de operaciones de la empresa y problemas políticos». Miembros de diversas comunidades han mostrado su descontento con Tectona y apuntan a que jefes y representantes locales aceptan dinero de la empresa en lugar de defender sus derechos.

Empresas afectadas: Tectona Forest, Global Solidarity Forest Fund

<http://ejatlas.org/conflict/tectona-monoculture-tree-plantations-mozambique> (en inglés)
<http://www.open.ac.uk/technology/mozambique/sites/www.open.ac.uk.technology.mozambique/files/pics/d131619.pdf> (en inglés)

The Munden Project

Lugar: Proyecto agrícola Hoyo Hoyo de Quifel (Lioma)

Suceso: Quifel Natural Resources tiene una concesión de 10 000 hectáreas en Lioma, por la cual prometió la creación de puestos de trabajo, un centro de salud y numerosos beneficios más para la comunidad. Desde entonces Quifel no ha alcanzado los parámetros necesarios (por ejemplo, no ha terminado la demarcación en el plazo exigido) ni ha proporcionado ninguno de los beneficios mencionados. A fecha de enero de 2013, seguía sin haber postes de demarcación y solo se habían plantado 400 hectáreas, por las que se desplazó a más de 200 familias. El proyecto está operativo, a pesar de los incidentes de interrupción del tráfico rodado y las frecuentes protestas.

Empresas afectadas: Quifel Natural Resources

<http://ejatlas.org/conflict/quifels-hoyo-hoyo-agriculture-project-in-lioma-zambezia-region-mozambique> (en inglés)

http://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/OI_country_report_mozambique_0.pdf (págs. 43-44) (en inglés)

Lugar: Plantaciones de Chikweti (Niassa)

Suceso: La inversión de Chikweti en plantaciones de pino e eucalipto ha provocado conflictos con las comunidades rurales porque la concesión ocupa la misma tierra que han usado tradicionalmente las comunidades, e incluso bloquea zonas que usaban para acceder al agua y las tierras de cultivo. Chikweti Forests of Niassa Sarl es otra empresa financiada por el Global Solidarity Forest Fund. El Gobierno intervino, multó a la empresa e implementó más normas y un mayor control.

Empresas afectadas: Chikweti Forests, Global Solidarity Forest Fund

<http://ejatlas.org/conflict/chikweti-plantations-mozambique> (en inglés)

<http://www.open.ac.uk/technology/mozambique/sites/www.open.ac.uk.technology.mozambique/files/pics/d131619.pdf> (págs. 50-54) (en inglés)

Lugar: Explotaciones forestales de Malonda (Niassa)

Suceso: Malonda Tree Farm, gestionada por Green Resources AS (una empresa noruega financiada por Norfund), participa en la creación de 60 000 hectáreas de plantaciones de eucalipto y pino. Los conflictos con las poblaciones locales han sido violentos desde que la empresa empezara a desmontar la tierra y plantar. La empresa dice que el proyecto solo incluye tierras

The Munden Project

abandonadas por la población local. Miembros de la comunidad afirman que Malonda no ha respetado los límites de las concesiones ni ha entablado el nivel adecuado de consulta comunitaria.

Empresas afectadas: Malonda Tree Farm, Green Resources AS, Norfund

<http://ejatlas.org/conflict/malonda-tree-farms-in-niassa-mozambique> (en inglés)

<http://www.open.ac.uk/technology/mozambique/sites/www.open.ac.uk.technology.mozambique/files/pics/d131619.pdf> (pág. 49-50) (en inglés)

Lugar: Explotación forestal y secuestro de carbono de Lurio y Sanga (Niassa)

Suceso: Green Resources AS (Noruega) participa en una plantación forestal y proyecto de secuestro de carbono como parte del Mecanismo de Desarrollo Limpio, que abarca 126 000 hectáreas y un plazo de 15 años. Los residentes locales declaran que no contribuyeron en absoluto al proceso de adquisición de tierras y que el proyecto solo ha ofrecido puestos de trabajo temporales y no ha cumplido sus promesas. También parece que Green Resources no cuenta con un plan de desarrollo comunitario específico.

Empresas afectadas: Green Resources AS

<http://ejatlas.org/conflict/green-resources-as-niassa-project> (en inglés)

Lugar: Fábrica de cemento Cimentos de Mocambique, Matola (Maputo)

Suceso: En 2000 la fábrica de cemento Cimentos de Mocambique comenzó a despedir columnas de humo desde su planta, que alcanzaban los barrios colindantes. Los residentes locales presentaron quejas ante el Ministerio de Medio Ambiente y la municipalidad de Matola alegando que los filtros de la fábrica no funcionaban correctamente. Al ver que no se tomaban medidas al respecto, comenzaron protestas respaldadas por las comunidades locales, ecologistas e incluso otras fábricas locales. Aunque las partículas no son tóxicas, causan problemas pulmonares/respiratorios, y el polvo daña la vegetación afectada. La planta sigue operativa e incluso ha solicitado un crédito al Mecanismo de Desarrollo Limpio porque usa gas natural en lugar de carbón para abastecer la planta de combustible. En 2009 se instalaron filtros nuevos, pero el nivel de contaminación sigue superando los niveles aceptables establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

Empresas afectadas: Cimentos de Mocambique SA

<http://ejatlas.org/conflict/fuel-switching-by-cimentos-de-mocambique-matola-gas-company-mozambique> (en inglés)

SUDÁFRICA

Lugar: Ciudad del Cabo (Municipalidad de la ciudad de Ciudad del Cabo)

Suceso: En 1997 sudafricanos que padecían una enfermedad relacionada con el amianto demandaron a Cape PLC ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra para obtener indemnización por sus actividades de extracción y trituración de amianto de Sudáfrica. Los reclamantes eran antiguos trabajadores y residentes locales. Para 2001 había 7 500 demandantes. Finalmente se llegó a un acuerdo por el cual Gencors creó un fondo de 35 millones de libras esterlinas (£) que ahora administra, aparte de los 3 millones de libras (£) que pagó a los demandantes. Cape, por su parte, les pagó 7,5 millones de libras (£). La extracción del amianto se detuvo a mediados de la década de 1980, pero a la gente se le siguen diagnosticando con regularidad enfermedades relacionadas.

Empresas afectadas: Cape PLC, Gencors

<http://annhyg.oxfordjournals.org/content/55/6/569.full> (en inglés)

<http://ejatlas.org/conflict/cape-gencors-asbestos-mining-milling-activity-south-africa> (en inglés)

Lugar: Karoo (varios distritos)

Suceso: Un gran número de empresas de gas y petróleo tratan de acceder al *shale gas* (gas de esquisto) de la cuenca de Greater Karoo mediante fractura hidráulica. A las comunidades locales les preocupan los riesgos asociados para el agua y el aire, la economía existente y la salud humana y ambiental. Enfrentándose a la oposición pública, el Gobierno de Sudáfrica creó un grupo de trabajo que analizara las repercusiones de la fractura hidráulica (*fracking*) y declaró una moratoria sobre las solicitudes de exploración. El Karoo Action Group interpuso una demanda cuando no se nombró a ningún grupo de la sociedad civil para que formara parte del grupo de trabajo, y ganó. La moratoria estuvo vigente 17 meses, hasta septiembre de 2012, cuando se levantó.

Empresas afectadas: Sosal, Shell

<http://ejatlas.org/conflict/hydraulic-fracking-in-the-karoo-south-africa> (en inglés)

<http://thegreentimes.co.za/protest-against-fracking-threatening-water/> (en inglés)

<http://mg.co.za/article/2012-04-20-the-fracking-intrusion-of-a-sacred-space/> (en inglés)

Lugar: Pondoland Wild Coast (Eastern Cape)

The Munden Project

Suceso: Transworld Energy and Minerals y su socio local Xolco propusieron extraer ilmenita, rutilo y circón en la costa Pondoland de Xolobeni. El área propuesta se superpone al Pondoland Centre of Endemism, una zona de gran riqueza botánica, lo que ha generado una oposición considerable, incluidas manifestaciones de campesinos y grupos indígenas que podrían resultar desplazados. El proyecto ya se ha retrasado debido a las preguntas planteadas por las autoridades locales.

Empresas afectadas: Transworld Energy and Minerals, Xolco

<http://ejatlas.org/conflict/pondoland-wild-coast-xolobeni-mining-threat-south-africa> (en inglés)

<http://www.wildcoast.co.za/xolobeni> (en inglés)

Lugar: Fábrica de Sappi Saiccor del río Mkomazi (KwaZulu-Natal)

Suceso: La fábrica de Sappi Saiccor opera en el río Mkomazi, río arriba de la aldea de Umkomaas. La fábrica usa agua del río, obtiene energía del carbón, generando así contaminación atmosférica, y vierte al mar residuos líquidos y a las tierras de cultivo residuos sólidos. Los residentes locales sufren enfermedades por la contaminación resultante pero las operaciones no han cesado. La empresa «sobornó» con pequeños donativos a colegios y organizaciones locales, que al parecer compraron su silencio.

Empresas afectadas: Sappi Specialised Cellulose

<http://ejatlas.org/conflict/sappi-saiccor-pulp-mill-pollution-south-africa> (en inglés)

<http://chrislang.org/2005/11/29/south-africa-sappi-saiccor-to-expand-its-polluting-pulp-mill/> (en inglés)

Lugar: Bisasar, Durban (KwaZulu-Natal)

Suceso: Durban Solid Waste y Environmental Waste Solutions (South Africa) operan el vertedero de Bisasar Road de Durban. Aquí se tiran aproximadamente 3 000-5 000 toneladas de vertidos al día, lo que ha provocado un aumento en el índice local de casos de cáncer. Los miembros de la comunidad han exigido repetidamente el cierre del vertedero, pero este se aprobó como proyecto piloto del Mecanismo de Desarrollo Limpio para convertir metano en electricidad. El Banco Mundial otorgó una inversión inicial de 14 millones de dólares estadounidenses (US\$), pero en 2005 se negó a adquirir créditos de emisiones por las dudas que planteaban las cuestiones de justicia ambiental en Durban.

Empresas afectadas: Durban Solid Waste, Environmental Waste Solutions (South Africa)

The Munden Project

<http://ejatlas.org/conflict/bisasar-rd-landfill-site-south-africa> (en inglés)

Lugar: Mina de carbón de Leeuwpan (Mpumalanga)

Suceso: Activistas locales alegan que la expansión de esta mina de extracción de carbón es ilegal. Los campesinos vecinos de la mina denuncian que el proyecto de minería no cuenta con la licencia de aguas pertinente. El caso se llevó a los tribunales y se falló a favor de la población local. Las operaciones se detuvieron hasta que se expidiera la licencia adecuada.

Empresas afectadas: Exxaro Leeuwpan Colliery

<http://mg.co.za/article/2012-05-14-delmas-farmer-lodges-complaint-against-exxaro> (en inglés)

<http://www.ejolt.org/2012/11/natural-water-body-threatened-by-large-mining-company/> (en inglés)

<http://oxpeckers.org/2013/12/ways-to-kill-a-wetland/> (en inglés)

CAMBOYA

Lugar: Reserva natural de Lumphat (Ratanakkiri)

Suceso: En 2013 la ONG británica Global Witness publicó un informe en el que se acusaba a la empresa diversificada vietnamita Hoang Anh Gia Lai (HAGL) de talar ilegalmente en la reserva natural de Lumphat, fuera de las áreas de concesión, y de estar en posesión de al menos 47 000 hectáreas de concesiones de tierras con fines económicos, lo que supone casi cinco veces más que el límite legal. Diecisiete comunidades indígenas acusaron a HAGL de acaparamiento de tierra en sus aldeas de la provincia de Ratanakkiri y presentaron una queja ante la Corporación Financiera Internacional (CFI), que invierte en esta productora de caucho a través de un fondo intermediario llamado Dragon Capital Group.

En abril de 2014, HAGL respondió a una solicitud de la CFI y anunció que iba a suspender las operaciones de tala de tres proyectos de la provincia del 1 de mayo al 30 de noviembre.

Empresas afectadas: Hoang Anh Gia Lai y sus filiales de la provincia de Ratanakkiri (Hoang Anh Andong Meas, Hoang Anh Oyadav, Heng Brothers), las madereras que trabajan para HAGL (Cheng Bo Ying Co. Ltd., MDHL Share World Co. Ltd., Savan Prasith Investment and Construction Co. Ltd) y los inversores de HAGL (la Corporación Financiera Internacional a través de Dragon Capital Group, Deutsche Bank, Credit Suisse)

<http://www.cambodiadaily.com/archives/rubber-firm-accused-of-illegal-logging-puts-work-on-hold-58287/> (en inglés)

<http://www.globalwitness.org/library/credit-suisse-ignored-human-rights-commitments-and-became-major-shareholder-vietnamese> (en inglés)

Lugar: Borei Keila (Phnom Penh)

Suceso: En 2003 se propuso un acuerdo de reparto de tierras para la comuna de Borei Keila de Phnom Penh, con el fin de permitir a una empresa privada desarrollar parte de la zona con fines comerciales, a la vez que se ofrecía a los residentes un alojamiento alternativo en la tierra restante. El Primer Ministro de Camboya, Hun Sen, autorizó una concesión social de tierras de 4,6 hectáreas, y el Gobierno contrató a Phan Imex para la construcción de 10 bloques de apartamentos en una superficie de 2 hectáreas, con el fin de alojar a 1 776 familias, a cambio de los derechos para reurbanizar la tierra restante con alojamiento de lujo, oficinas y locales comerciales.

Para 2010 Phan Imex solo había construido 8 de los 10 edificios y, en vez de lo acordado, ofrecía a los residentes una indemnización y viviendas fuera de Phnom Penh. No todas las familias se trasladaron a las zonas de reubicación: algunas se quedaron en Borei Keila, manifestándose para exigir a Phan Imex y al Gobierno viviendas e indemnización. En enero de 2012, se dieron enfrentamientos entre residentes de Borei Keila y fuerzas privadas de seguridad contratadas por Phan Imex para desalojarles. En la primavera de 2014, tras varios enfrentamientos con fuerzas de seguridad del Gobierno por haber ocupado un edificio de la zona en construcción, algunos residentes seguían rechazando las ofertas del Gobierno de alojamiento temporal en Borei Keila. Phan Imex, que se ha declarado en bancarrota, ha recibido una sentencia de los tribunales de devolver a una empresa coreana el depósito de 2,7 millones de dólares estadounidenses (US\$) por tierras en Borei Keila que nunca se entregaron.

Empresas afectadas: Phan Imex

<http://www.opendevdevelopmentcambodia.net/tag/phan-imex/> (en inglés)

<http://www.phnompenhpost.com/national/bricks-used-drive-out-authorities> (en inglés)

<http://www.phnompenhpost.com/national/borei-keila-deal-taken-some> (en inglés)

Lugar: Distritos de Thpong y Oral (Kampong Speu)

Suceso: En abril de 2010, las operaciones de Phnom Penh Sugar Company para desmontar tierras en Kampong Speu se vieron interrumpidas por manifestantes de las aldeas afectadas. Los residentes locales se manifestaban en contra del desalojo masivo provocado por la asignación de tierra a Phnom Penh Sugar Company (PPSC) como concesiones de tierras con fines económicos. La superficie total de las concesiones superaba las 23 000 hectáreas, más del doble del tamaño permitido por la legislación agraria de Camboya. Las concesiones invaden más de 2 000 hectáreas

The Munden Project

de tierras de cultivo que pertenecen a familias de los distritos de Thpong y Oral, así como tierras para pastos, recursos hídricos y un bosque comunitario oficial.

Se quemaron las oficinas de la empresa y se bloquearon carreteras para impedir el acceso a la fábrica.

Empresas afectadas: Phnom Penh Sugar Co. Ltd y su empresa asociada Kampong Speu Sugar Co. Ltd.

<http://www.phnompenhpost.com/national/cambodian-sugar-plant-leaves-villagers-bitter> (en inglés)

http://www.nytimes.com/2013/10/01/business/international/in-cambodias-cane-fields.html?_r=2& (en inglés)

<http://www.inclusivedevelopment.net/anz-bankrolls-massive-land-grab-in-cambodia/> (en inglés)

INDIA

Lugar: Mehdiganj (Uttar Pradesh)

Suceso: Las autoridades gubernamentales del estado han cerrado esta planta de embotellado de Coca-Cola. La junta de control de la contaminación de Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) exigió el cierre de esta planta porque descubrió que la empresa incumplía varias de las condiciones de su licencia, o «certificado de conformidad». La decisión de expulsar a Coca-Cola proviene de una [orden](#) (en hindi) dictada por el *Tehsildar*, el funcionario local encargado de los impuestos, en diciembre de 2013, después de una investigación oficial llevada a cabo por la insistencia de los residentes locales. Además, se impuso a la empresa una multa de 124 590 rupias, esto es, aproximadamente 2 000 dólares estadounidenses (US\$).

Coca-Cola no ha podido comenzar las operaciones de las nuevas instalaciones porque carece de los permisos necesarios debido a las objeciones locales. Coca-Cola consiguió una suspensión temporal de la orden de la UPPCB del cierre de la planta de Mehdiganj de la empresa. El National Green Tribunal permitió a la empresa continuar con sus operaciones actuales pero le impidió avanzar con la expansión de sus instalaciones.

Empresas afectadas: Coca-Cola

<http://www.toxicwatch.org/2014/06/coca-cola-plant-shut-down-in-india.html> (en inglés)

<http://www.scoop.co.nz/stories/WO1401/S00285/india-coca-cola-to-be-evicted-from-illegally-occupied-land.htm> (en inglés)

<http://www.edie.net/news/6/Coca-Cola-to-be-evicted-from-illegally-occupied-land-by-Indian-authorities/> (en inglés)

http://www.organicconsumers.org/articles/article_30429.cfm (en inglés)

The Munden Project

<http://hotnhitnews.com/Shutdown-ordered-for-Coca-Cola-plant-licence-cancelled-HotnHitNews-19118062014.htm> (en inglés)

<http://www.dailypioneer.com/state-editions/dehradun/state-skipping-sc-verdict-in-coca-cola-project.html> (en inglés)

Lugar: Proyecto Nano, Singur (Bengala Occidental)

Suceso: Tata Motors decidió abandonar su fábrica del proyecto Nano en Singur, Bengala Occidental. Tuvieron que reasentarse y trasladar sus equipos y maquinaria desde Singur (Bengala Occidental) hasta el Gujarat, donde se fabrica el Nano. La construcción de esta planta había comenzado en enero de 2007 pero la empresa tuvo que abandonar Singur, en octubre de 2008, por los disturbios y la agitación política.

Los manifestantes propusieron un acuerdo por el cual se permitía a Tata quedarse con los 600 acres sobre los que ya había construido y devolver a los campesinos los 400 restantes. Esta propuesta fue rechazada tanto por el Gobierno estatal como por Tata Motors. El traslado es una opción muy cara, cuando se ha completado el 85 % de la planta, y Tata perdería su inversión de 350 millones de dólares estadounidenses (US\$), además de tener que desembolsar otros 50-100 millones de dólares (US\$) para el traslado. El problema más grave es que, para mantener el bajo precio del coche más barato del mundo, Tata había planeado que sus proveedores instalaran fábricas en los 400 acres bajo disputa.

Empresas afectadas: Tata Motors

<http://blogs.lse.ac.uk/indiaatlse/2013/09/13/learning-from-singur-land-acquisition-and-compensation-in-india/> (en inglés)

<http://www.businessweek.com/stories/2008-08-27/why-indian-farmers-are-fighting-tatas-nanobusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice> (en inglés)

<http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aP8iIdFX6l9w> (en inglés)

Lugar: Acería POSCO (Orissa)

Suceso: El proceso de adquisición de tierra para el proyecto de acero de POSCO de Orissa (India) sufrió una suspensión temporal. Un gran número de activistas sociales se lanzaron hacia la zona del proyecto de POSCO en apoyo de los residentes que se manifestaban y, gracias a ello, parece que el Gobierno estatal ha detenido su adquisición de tierras para la acería de POSCO en el distrito de Jagatsinghpur, de 12 millones de toneladas de producción. Durante los últimos cinco años, los residentes de las aldeas del terreno propuesto se han manifestado sin descanso, bajo el epígrafe POSCO Pratirodh Sanghrsa Samiti (Movimiento popular antiPOSCO), en contra del

The Munden Project

proceso de adquisición de tierra. Más de 4 000 familias, esto es, una población total de 30 000 personas, se verán afectadas por el proyecto.

Empresas afectadas: POSCO

<http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/07/201171711310873319.html> (en inglés)

<http://divergences.be/spip.php?article857&lang=fr> (en inglés)

http://www.telegraphindia.com/1140114/jsp/nation/story_17784488.jsp#.U8P7oRbJAI (en inglés)

<http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/despite-protests-odisha-continues-with-land-acquisition-for-posco/article4878973.ece> (en inglés)

<http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2011/07/04/orissa-anti-posco-protest-is-a-family-affair/> (en inglés)

<http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/asia-pacific/india/130308/indian-women-strip-protest-odisha-posco> (en inglés)

INDONESIA

Lugar: Ketapang (Kalimantan Occidental)

Suceso: Al parecer, a mediados de 1999 los vecinos volvieron a ocupar 2 000 hectáreas de la plantación de HSL/Commonwealth Development Corporation y marcaron su antigua propiedad con tablones que llevaban escrito su nombre. A principios de julio de 2000, entre 50 y 60 personas de tres aldeas talaron 400 palmas de aceite de la zona en concesión a plena luz del día como protesta simbólica. Los vecinos denunciaban que les habían obligado a ceder su tierra y que se habían manipulado los formularios de consentimiento y los pagos de indemnización.

Empresas afectadas: PT Harapan Sawit Lestari (HSL), Cargill, CTP Holding, CDC Group

<http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/ccdc2.htm#Cfl> (en inglés)

<http://www.downtoearth-indonesia.org/story/conflicts-between-community-and-british-owned-plantation-company-kalimantan> (en inglés)

<http://www.ejAtlas.org/conflict/pt-hsl-conflict-kalimantan> (en inglés)

Lugar: Kuala Batee, sur de Aceh (Sumatra)

Suceso: Tras unas disputas por la tierra se quemaron y dañaron bienes de la empresa. Se quemó el campamento base de la empresa, incluidos dos edificios de oficinas y el dormitorio de un empleado. Como resultado de ello, se desalojó a algunos empleados de la empresa. También se dañaron o confiscaron vehículos, maquinaria pesada y otros equipos.

The Munden Project

Los vecinos estaban descontentos con las disputas sobre tierras entre los campesinos locales y la empresa. Durante meses se intentó negociar los derechos sobre la tierra pero, al final, se desató un conflicto violento.

Empresas afectadas: PT Cemerlane Abadi

<http://www.ejAtlas.org/conflict/pt-cemerlang-abdi-conflict-sumatra> (en inglés)

http://www.nas.gov.sg/archivesonline/audiovisual_records/record-details/4fc05cc7-1164-11e3-83d5-0050568939ad (en inglés)

Lugar: Merauke (Papua)

Suceso: Las comunidades locales afectadas por las operaciones de Wilmar exigieron que la empresa detuviera sus operaciones sobre el terreno mientras se llevaban a cabo EIA adecuadas y exhaustivas y, además, que se realizara un proceso de consulta transparente con el objetivo de obtener el consentimiento de las comunidades para la adquisición de tierras. Posteriormente se decidió que el permiso de Wilmar se traspasaría al distrito de Animha y que su tamaño se reduciría a un máximo de 80 000 hectáreas.

Empresas afectadas: Wilmar International

<http://www.downtoearth-indonesia.org/story/why-not-wilmar> (en inglés)

<http://www.ejAtlas.org/conflict/wilmar-international-sugar-plantations-in-merauke-papua-indonesia> (en inglés)

https://awasmiffee.potager.org/?page_id=168 (en inglés)

<http://www.panap.net/en/fs/post/food-sovereignty-wfd-2012/1292> (en inglés)

<http://bio-fuel-watch.blogspot.com/2014/02/biofuelwatch-down-to-earth-article.html> (en inglés)

<http://www.scoop.co.nz/stories/WO1207/S00621/indonesia-miffee-stealthy-face-of-conflict-in-west-papua.htm> (en inglés)

<http://www.downtoearth-indonesia.org/story/starvation-and-poverty-indonesia-civil-society-organisations-appeal-suspension-miffee-project-p> (en inglés)

Lugar: provincia de Sumatra del Norte

Suceso: La tierra concedida a PT LonSum para su plantación de palma de aceite, caucho y cacao fue ocupada ilegalmente por miembros de la comunidad local que denunciaban que la tierra se había tomado sin su consentimiento. En diversas ocasiones, los vecinos entraron y ocuparon y dañaron tierras y plantaciones bajo la propiedad de PT LonSum, que la empresa había obtenido a

The Munden Project

través de un permiso de uso de la tierra para plantaciones de palma de aceite, caucho y cacao. Los vecinos también comenzaron a desmontar la tierra, alegando que la empresa se la había arrebatado.

El 12 de agosto de 2013, 3 000 bulukumbas, encabezados por el AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria, la alianza del movimiento de reforma agraria), ocuparon las plantaciones de PT LonSum para recuperar sus tierras. Les recibió el representante del Gobierno local de Bulukumba, quien prometió llevar sus peticiones ante el Gobernador de Sulawesi del Sur, con el fin de comenzar un proceso de mediación.

Empresas afectadas: PT LonSum

<http://www.downtoearth-indonesia.org/story/dayaks-charged-oil-palm-dispute> (en inglés)

<https://www.greenleft.org.au/node/29254> (en inglés)

<http://earthofpeople.wordpress.com/2013/08/21/3-000-bulukumba-peasants-occupy-loncum-ltd-agricultural-plantation/> (en inglés)

<http://plantationworkers.blogspot.com/2007/04/human-rights-abuses-in-plantation-and.html> (en inglés)

<http://www.fian.org/fileadmin/media/publications/0417HIDO-Pergulaan-e01.pdf> (en inglés)

http://indigenouspeoplesissues.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17478:indonesia-key-findings-in-defense-of-land-and-livelihood-of-indigenous-peoples-in-bulukumba-indonesia&catid=32&Itemid=65 (en inglés)

FILIPINAS

Lugar: Batong Buhay (Kalinga-Apayao)

Suceso: CNC es un consorcio de dirección china que supuestamente llevó a cabo perforaciones con carácter exploratorio de los grandes depósitos de oro y cobre de Batong Buhay (que se traduce literalmente como «roca viva»), una zona que reclama la tribu balatoc como tierra ancestral. Los residentes detuvieron las supuestas actividades de perforación de Balatoc en febrero de 2014. Cortaron el suministro de agua, lo que llevó a los operarios de las máquinas de perforación a abandonar sus operaciones en la zona.

«No queremos que esto desemboque en una situación violenta» dijeron los residentes locales, quienes mencionaron que la empresa minera no había obtenido el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) necesario antes de comenzar sus operaciones mineras en la zona.

Al final, la Comisión nacional de pueblos indígenas, un organismo parajudicial adscrito al despacho del Presidente de Filipinas, dictó una suspensión cautelar temporal contra CNC el 25 de junio de 2013, y posteriormente una resolución el 9 de septiembre de 2013, que estipulaba un mandato preliminar.

CNC y sus socios privados no estaban realizando actividades de minería tal como las entiende el público general; estaban llevando a cabo una exploración de mineral. No obstante, la exploración de mineral se incluye en la definición legal de la minería que aparece en la legislación aplicable a la queja que presentó la tribu.

Empresas afectadas: CNC

<https://ph.news.yahoo.com/cordillera-villagers-rally-behind-kalinga-tribe-mining-dispute-191444314.html> (en inglés)

<http://www.mb.com.ph/kalinga-tribe-wins-mining-case/> (en inglés)

<http://www.piplinks.org/kalinga-folk-block-entry-mining-firm> (en inglés)

<http://www.philstar.com/nation/2013/10/26/1249380/ncip-favors-kalinga-tribe-mining-case> (en inglés)

<http://bulatlat.com/main/2013/06/25/kalinga-folk-block-entry-of-mining-firm/> (en inglés)

Lugar: Tampakan, Mindanao (Cotabato del Sur)

Suceso: El proyecto Tampakan, que se promociona como la zona de minas de cobre y oro sin desarrollar más grande que se conoce en el sureste asiático, se vio limitado por la prohibición de minería a cielo abierto que se impuso en Cotabato del Sur a partir de 2010. En un informe de Indophil se reconocía que el proyecto Tampakan, situado en la conflictiva isla meridional de Mindanao, había sufrido problemas, principalmente la prohibición impuesta por el Gobierno provincial de realizar actividades de minería a cielo abierto, que había retrasado el comienzo del proyecto.

La mina sería la mayor inversión extranjera que ha tenido nunca Filipinas, pero se enfrenta a la oposición de la Iglesia, la comunidad y grupos ambientalistas. El proyecto requeriría la obtención de múltiples permisos gubernamentales y comunitarios adicionales.

Los obispos, encabezados por el nuevo Cardenal y Arzobispo de Cotabato, Orlando Quevedo, escribieron una carta al Presidente Benigno Aquino III, en la que mencionaban que, aunque la minería puede contribuir a la economía, el proyecto de la unidad de Filipinas de la empresa minera mundial Xstrata Plc podría perjudicar a la comunidad local y al medio ambiente. Los líderes de la Iglesia recalcaron también que su oposición al proyecto se basa en «razones morales», ya que va en contra de la integridad de la creación de Dios, además de provocar la destrucción de casi 4 000 hectáreas de tierra.

El objetivo de extraer 13,5 millones de toneladas métricas de cobre y 15,8 millones de onzas de oro, en teoría, proporcionaría a la economía 134 000 millones de pesos filipinos (P) al año. El Gobierno otorgó, por fin, un certificado de cumplimiento ambiental a Sagittarius, una de las

The Munden Project

unidades de Xstrata, en febrero de 2013, a pesar de las peticiones de diversos sectores de que se detuviera el proyecto. El Obispo de Marbel, Dinualdo Gutierrez, denunció que Aquino había hecho caso omiso a una petición de más de 100 000 personas para que se descartara el proyecto de minería.

En agosto de 2013, Glencore Xstrata dijo que iba a despedir a casi todos los trabajadores del proyecto Tampakan por los continuos retrasos, pero Indophil anunció en su informe trimestral que la empresa y sus socios locales «siguen siendo optimistas respecto a que se abrirá el camino para desarrollar Tampakan».

Glencore Xstrata es propietaria del 62,5 % e Indophil del otro 37,5 % de una empresa conjunta que posee una participación de control de un 40 % de Sagittarius Mines, Inc., la empresa que opera el proyecto Tampakan.

Empresas afectadas: Indophil, Glencore Xstrata, Sagittarius Mines, Inc.

<http://www.gmanetwork.com/news/story/346542/economy/companies/glencore-xstrata-to-pull-out-of-philippine-mining-project> (en inglés)

<http://www.gmanetwork.com/news/story/352786/economy/agricultureandmining/bishops-seek-stop-to-tampakan-mining-in-mindanao> (en inglés)

<http://www.mindanews.com/top-stories/2014/05/08/tampakan-project-budget-for-2014-down-to-9m/> (en inglés)

<http://www.piplinks.org/groups-hold-indignation-rally-protest-tampakan-project> (en inglés)

Lugar: Proyecto de usos múltiples del río Jaluar (Iloilo)

Suceso: El 31 de octubre de 2013 se dictó una Orden de Kalikasan en contra del proyecto de usos múltiples del río Jaluar (Jaluar River Multipurpose Project o JRMP) II, valorado en 11 200 millones de pesos filipinos (P). El JRMP II es un megaproyecto hidroeléctrico de Iloilo (Filipinas). La Orden de Kalikasan es un recurso jurídico a favor de las partes que creen que «se ha violando o amenazado de violación su derecho constitucional a un medio ambiente equilibrado y sano», con el fin de que se detengan un acto o unas acciones destructivas para el medio ambiente.

Lo que provocó que se dictara la orden fue una petición presentada por Augusto Syjuco Jr., antiguo diputado de Iloilo, quien alegó que por culpa del proyecto miles de indígenas se verían desplazados y se presentaría un «peligro horrendo e inconcebible», que incluiría el riesgo de inundaciones y destrucción del hábitat. También hubo protestas de varios grupos indígenas y otros grupos sectoriales.

Empresas afectadas: Dasan Consultants (Corea del Sur)

<http://newsinfo.inquirer.net/519727/nia-abides-by-writ-of-kalikasan-vs-megadam> (en inglés)

The Munden Project

<http://www.philstar.com/region/2014/02/28/1295497/indigenous-people-protest-iloilo-dam-project> (en inglés)

<http://www.philstar.com/region/2013/04/25/934714/protest-caravan-held-vs-mega-dam-project> (en inglés)

Lugar: Bahía de Subic (Zambales)

Suceso: El 30 de enero de 2013, el Tribunal de Apelación dictó una Orden de Kalikasan en contra del proyecto de Redondo Peninsula Energy Inc. para construir en Subic una central energética de 600-megavatios alimentada con carbón. La Orden de Kalikasan se dictó después de que varios grupos ambientalistas que se oponían al proyecto interpusieran una demanda. Los demandantes solicitaban a los tribunales que dictaran una Orden de protección ambiental temporal o una Orden de Kalikasan exigiendo a la corporación que respalda el proyecto, Redondo Peninsula Energy Inc., que lo detuviera y desistiera de construir y operar la central energética alimentada con carbón.

Describían el proyecto de esta central como una «amenaza para el medio ambiente y la vida de las personas». El Presidente del partido Kalikasan, Clemente Bautista Jr., comentó: «La región de Luzon Central correrá el riesgo de [sufrir] más contaminación y desastres si se permite que opere esta central energética alimentada con carbón». El abogado Terry Ridon, asesor jurídico de los demandantes, afirmó que «el proyecto viola los derechos constitucionales de los residentes de las provincias de Zambales y Bataan a un medio ambiente equilibrado y sano. Además, incumple las disposiciones del Código de Gobierno Local y la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas».

Empresas afectadas: Redondo Peninsula Energy Inc.

<http://www.philstar.com/business/2014/06/23/1337853/industry-group-airs-concern-over-delay-subic-power-proj> (en inglés)

<http://business.inquirer.net/124129/ca-maintains-decision-junking-writ-of-kalikasan-vs-rp-energy> (en inglés)

<http://www.philstar.com/business/2014/06/23/1337853/industry-group-airs-concern-over-delay-subic-power-proj> (en inglés)